



ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

sumario

editorial	4
• educación cívica y participación ciudadana	
capacitación electoral y educación cívica, herramientas en la construcción de una cultura democrática	8
Manuel García Urrutía M.	
implementación de la votación electrónica, con valor oficial, en el proceso electoral constitucional 2005 en Coahuila	17
Homero Ramos Gloria	
voz y voto: ciudadanía integral	23
Gustavo Fernández Saavedra	
las elecciones que vimos: la elección de gobernador en el estado de México	29
Manuel García Urrutía M.	
• • autonomía y funcionamiento de los organismos electorales	
¿cómo se relacionan los organismos electorales con los poderes públicos y los partidos políticos?	36
Antonio Alanís Huerta	
la autonomía de los órganos electorales en el desarrollo de la democracia en México	43
Jesús Cantú Escalante	
estado y desafíos de la ciudadanización de los órganos electorales locales	52
Ernesto Hernández Norzagaray	
desarrollo de la autonomía de los órganos electorales en México	58
W. Humberto Vázquez Rubio	
• • • análisis político y construcción de ciudadanía	
las formas de representación política (parte III)	66
F. G. Marín	
la educación ciocívica	73
Gildardo Durán Sánchez	
re)semantización de la política	83
Ignacio Hurtado Gómez	
posibilidades de la sociedad civil y sociedad política para la formación del sujeto ciudadano	91
Jorge Vázquez Piñon	

editorial

En mayo de 1995, hace ya diez años, se creó el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) como parte de las reformas legales que fueron abriendo paso a la autonomía de los gobiernos y los partidos, así como a la ciudadanización, de los organismos electorales estatales del país.

Después de un proceso electoral intenso y competido, a fines del año pasado, y de una elección extraordinaria, realizada en junio de este año, en el municipio de Tumbiscatío –debido a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)–, puede decirse que el IEM ha cumplido una de sus funciones sustantivas, la de organizar las elecciones, con eficiencia y apego a los principios que le dieron origen.

Hoy, sin hacer de lado lo que aún falta por construir y realizar en materia electoral, puede decirse que el IEM es una institución confiable a los ojos de la ciudadanía en cuanto a velar por la autenticidad y efectividad de su voto. Hoy, ya los votos se cuentan, pero falta mejorar la calidad de su emisión, permitir el acceso al voto a más michoacanos sin importar el lugar donde se encuentren y corregir las condiciones de equidad de la competencia electoral. Sin duda, estos son retos que rebasan las atribuciones y posibilidades del IEM; y por eso, se requiere el concurso de los actores políticos, de la Cámara de Diputados, de las autoridades de gobierno y la sociedad civil, a fin de generar consensos que permitan no sólo avanzar en una reforma electoral de vanguardia sino, sobre todo, cambiar prácticas y apoyar programas de largo alcance que permitan arraigar una cultura política comprometida con valores democráticos.

Es en este rubro, el del desarrollo de la vida democrática, donde las actividades del IEM se han enfocado para hacer de este año de aniversario un tiempo que contribuya a la valoración de lo avanzado y la ubicación de

los retos y riesgos (muchos regresivos, otros nuevos) que se ciernen sobre los organismos electorales de no ampliarse sus facultades y consolidar su autonomía y el proceso de ciudadanización de sus órganos de decisión.

Es por ello que este número de *EXPRESIONES* está dedicado a recoger algunas ponencias que fueron presentadas en el Cuarto Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Estatales y otras reflexiones sobre la necesidad de revisar la autonomía, las relaciones entre organismos electorales y otros actores políticos y el concepto de ciudadanía en la idea de fortalecer la naturaleza de las instituciones del ramo.

El décimo aniversario del IEM ha tenido la fortuna de celebrarse con el marco de dos reuniones nacionales, una, la ya señalada, el *Cuarto Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Estatales* y otra, la *Reunión Nacional de Capacitación Electoral y Educación Cívica*; ambas han dado realce a la conmemoración dada la convocatoria y la solidaridad recibida, con su asistencia, por parte de los integrantes de los organismos electorales hermanos de todo el país. Este hecho se reconoce y se agradece ampliamente alentando la necesidad de continuar multiplicando los intercambios.

Pero también este número de *EXPRESIONES* es parte de los festejos del IEM. Sirvan la docena de artículos que le dan contenido para enfatizar las inquietudes que, en materia electoral, existen ante la actual coyuntura política del país. Los apartados pueden agregarse en función de dos temas: 1) La capacitación electoral y la educación cívica en el ánimo de avanzar en la construcción de una ciudadanía integral y una nueva forma de entender la política. 2) Las relaciones, la autonomía y ciudadanización de los organismos electorales para su fortalecimiento institucional y el desarrollo democrático.

Además, están artículos sobre la observación electoral en el Estado de México y los retos a superar o la preparación para implementar la urna electrónica que por primera vez se usará, legalmente, en una elección estatal. Y, finalmente, en la sección de análisis político, se incluye una tercera entrega sobre el tema las formas de representación política; otras formas de entender la democracia y la construcción de ciudadanía.



Manuel García Urrutía M.



Homero Ramos Gloria



Gustavo Fernández Saavedra



Manuel García Urrutía M.



ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

- **educación cívica y**
participación ciudadana



capacitación electoral y educación cívica, herramientas en la construcción de una cultura democrática¹

Manuel García Urrutía M.*

8

La reunión que hoy iniciamos tiene básicamente tres impulsos que convergen: un acuerdo del Cuarto Encuentro Nacional de Consejeros de Organismos Electorales Estatales; la disposición de los Presidentes de los Institutos Electorales por profundizar sobre el tema de la educación cívica en un marco de experiencias compartidas que aliente la coordinación de esfuerzos en tareas comunes ante la necesidad de consolidar la cultura democrática en el país y, finalmente, una preocupación de integrantes del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Instituto Federal Electoral (IFE) en relación a la necesidad de generar sinergias que contribuyan a fortalecer la confianza y la presencia social de los órganos electorales y motiven la participación ciudadana como formas de abatir el abstencionismo en las elecciones por venir, especialmente las federales del año que entra, que tendrán repercusiones importantes en nuestras expectativas, como instituciones y como sociedad, por arraigar un auténtico régimen democrático.

Las ideas que quiero compartir en este panel se basan en tres objetivos: *Uno.* Destacar la importancia de la capacitación electoral y la educación cívica en nuestras instituciones, tanto como la de organizar las elecciones, debido a que son un complemento indispensable para cumplir a cabalidad su tarea esencial: velar por la emisión libre y la efectividad del voto. *Dos.* Confrontar la idea de algunos funcionarios electorales en relación a que la educación cívica es una tarea que compete principalmente al ámbito educativo, especialmente a nivel de educación básica. Y *tres.* Mostrar que la capacitación electoral es más que adiestrar para cumplir una función el día de la jornada electoral, en virtud de que, fundamentalmente, contribuye a forjar ciudadanía.

Por tanto, los ejes de esta reflexión buscan servir de base y provocación para el intercambio de experiencias y posiciones del día de mañana, tanto

¹ Ponencia presentada en el Panel sobre educación cívica de la Reunión Nacional de Educación Cívica y Capacitación Electoral, organizada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), los días 7 y 8 de julio de 2005.

* Licenciado en Administración de Empresas. Profesor de la Universidad Latina de América en Morelia. Analista Político. Consejero Electoral Propietario del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IEM.

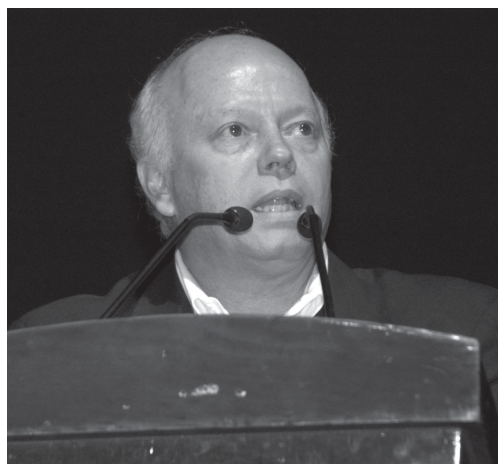


para identificar los puntos de encuentro como aquellos en los que haya diferencias. En los que existan afinidad y consenso, deseamos que puedan potenciarse a través de acuerdos, compromisos y acciones coordinadas; con otros puntos y experiencias, más particulares, se puede estar parcialmente de acuerdo y revisar si tienen cabida en el contexto en el que se desenvuelven y de los recursos que tienen nuestras instituciones. De lo que se trata, a fin de cuentas, es poner en común lo que mejor nos ha funcionado en cada lugar para que cada quien tome las propuestas, los *tips* que nos puedan servir, de acuerdo a sus necesidades, programas y prioridades, y salir de aquí con tres o cuatro acciones comunes que nos unifiquen y nos acerquen, que den sentido concreto a nuestra reunión y muestren nuestra voluntad de empujar juntos ideas y prácticas que fortalezcan valores democráticos.

Bajo esas premisas, enseguida paso a detallar cómo se ha entendido la capacitación electoral y la educación cívica dentro de las funciones de los organismos electorales, siendo esta área la que mayormente confronta las visiones ciudadanas de las que guardan los funcionarios profesionales al servicio de estas instituciones. Para el servicio profesional –y para muchos de nuestros políticos y gobernantes- la tarea fundamental

de nuestros institutos es organizar elecciones y por tanto, cualquier otra actividad que realicen debe subordinarse a ese cometido principal; la capacitación y la educación cívica deben, por supuesto, hacer lo propio y servir a ese fin. La capacitación electoral se entenderá entonces como una función que contribuya a la organización del proceso a través de adiestrar a funcionarios de casilla, a observadores electorales, a capacitadores-asistentes electorales y a quienes van a integrar los órganos desconcentrados, en el caso de los institutos estatales–Comités Electorales Distritales y Municipales, que incluye a Consejeros y Funcionarios que forman parte de estas instancias de carácter temporal. La capacitación electoral a funcionarios permanentes puede considerarse o no dentro de esa estrategia, pero normalmente su concepto cae dentro de la formación del servicio profesional y es de otra naturaleza.

9



iones



A la educación cívica, en ese contexto, se le concibe como aquellas actividades que ayudan a promover cuatro cosas: el registro de los ciudadanos en el padrón a través de la obtención de su credencial de elector; a que estos ciudadanos voten; a emitir ese voto de manera libre y secreta y a exhortar a su participación a fin de que acudan al llamado de los organismos electorales si son seleccionados como funcionarios de casilla. De manera colateral pueden darse conferencias, hacerse publicaciones y programas en medios que contribuyan a motivar la confianza institucional y a animar la participación. En tiempos electorales es fácil encontrar sentido y convergencia a la capacitación electoral y la educación cívica en apoyo al proceso.

La dificultad viene en tiempos no electorales; la capacitación electoral desaparece del mapa de actividades y la educación cívica se utiliza para justificar acciones en el presupuesto sin la convicción de darle un uso estratégico de largo alcance, sin claridad de grupos-objetivo ni de instituciones a involucrar más allá de algunas de corte educativo –poco se piensa en las administraciones públicas ya sea a nivel federal, estatal o municipal, en los partidos o en organismos de la sociedad civil; se tiene miedo de contaminar la independencia institucional.

10

Un debate recurrente con un buen amigo aquí presente es la importancia de la naturaleza ciudadana de los Consejeros para dar un enfoque diferente a esta problemática –y si el Consejero es mujer es todavía más, porque sí hay matices importantes en la forma de apreciar la realidad. Él afirma que los funcionarios de los organismos electorales también son ciudadanos –claro, él es funcionario electoral- y comparten en mucho las inquietudes de los Consejeros y puede ser cierto –de hecho, él tiene una profunda sensibilidad social-, pero sólo en parte, porque juegan diferentes roles y sirven, en ocasiones, a diferentes fines e intereses. Todos somos ciudadanos, pero la ley nos asigna diferentes funciones para lograr los cometidos institucionales, de ahí la necesidad de dialogar y conciliar posiciones, ejercicio, por cierto, inherente a la democracia. Así, mientras un Consejero puede pensar en la importancia de dar difusión a los documentos básicos de la institución, a ser más audaz, crítico y actuante ante las prácticas viciadas de los actores políticos, un funcionario electoral tiene más frenos –más si hay aspiraciones ascendentes- y seguirá pensando que lo mejor es guardar la información interna, que no hay que moverse ni opinar y que los organismos electorales, en tiempos que no hay elecciones, deben actuar con baja intensidad o mantenerse en estado



de hibernación; por eso los diputados de Veracruz pensaron que era mejor mandar a los Consejeros a sus casas en tiempos no electorales y volverlos a convocar cuando iniciara el proceso.

La diferencia viene al caso porque un Consejero Electoral puede tener una visión más activa sobre las tareas de educación cívica y de vinculación, mientras que para un funcionario pueden representar acciones que eleven costos, metan ruido y rebasen el ámbito legal por no estar éste previsto a detalle.

Con lo anterior simplemente trato de demostrar que la atribución de organizar elecciones, asignada a organismos electorales autónomos, tiene por objeto garantizar que sea el voto de los ciudadanos el que determine quién debe representarlos, quién debe gobernarlos o que política pública debe ejecutarse; cuidar, por ello, que ese voto sea de calidad, que sea emitido de manera libre e informada, sin presión alguna, para que refleje el auténtico sentimiento y la convicción del ciudadano. Este es el verdadero cometido de las instituciones electorales y no debemos perderlo de vista porque lograrlo a cabalidad es un reto que rebasa los tiempos y las tareas de la organización de las elecciones.

11

La capacitación electoral y la educación cívica, vistas así, deben gravitar siempre, en cada actividad que realice la institución, más aún si entendemos que velar por la efectividad del voto y la calidad de su emisión es una responsabilidad de todos; empezando por el propio ciudadano.

Que sea el libre albedrío de los individuos el que decida si vota y qué vota, pero que no sea la falta de información y compromiso ni la omisión de las instituciones la que los limite; para eso, la educación cívica en tiempos no electorales contribuye, en el mediano y largo plazo, a que la emisión del voto no sea ya un acto cuestionado sino el resultado de un trabajo institucional e integral que impulse la formación de un ciudadano pleno.

Casi siempre que se habla de educación cívica se le relaciona con el proceso educativo formal, de hecho en la reunión en la que participamos con los Presidentes de los organismos electorales para motivar este evento, alguno de los presentes decía que eso era competencia de la Secretaría de Educación a nivel federal y estatal. La percepción es que la educación cívica debe empezar en los niños porque es un problema de valores y prácticas relacionadas con

iones

el civismo y el amor a la Patria. Por tanto, en ese sentido, lo que había que hacerse es meter un capítulo relativo a las elecciones y la democracia en los libros de texto o, en el mejor de los casos, que los institutos electorales elaboren materiales para niños que sean motivo de dinámicas, repartidos y discutidos en las escuelas. Esta visión, sin desmerecer su parte de razón y la necesidad de ese trabajo, renuncia o minimiza la importancia de trabajar con jóvenes, adultos, con los propios actores políticos y los medios de comunicación en materia de educación cívica.

Tal parece que tendríamos que empezar por entender de qué se trata. La educación cívica sirve para formar hábitos y principios en los ciudadanos del futuro –y esto lo hace también un asunto de vinculación entre teoría y práctica, -pero de manera fundamental, sirve hoy, para informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de sus derechos y obligaciones con el fin, en nuestro caso, de reforzar una cultura política democrática. En ese sentido, nuestro grupo-objetivo inmediato lo constituyen los jóvenes que tienen más de 18 años, los que pueden votar y los que pueden afectar el sentido del voto. La educación cívica vista así, nos presenta diversos retos. En primer lugar nos involucra a todas las instituciones públicas y debe ser una estrategia de Estado –por ser de largo alcance-, pero a los organismos electorales nos toca una parte fundamental por la inmediatez de resultados que reclama nuestra tarea de organizar elecciones y abatir el abstencionismo mediante la promoción del voto y su emisión libre y secreta.





Los *Bachilleratos* y las *universidades* son espacios recurrentes para esta función – en esos espacios han existido experiencias desde la organización de elecciones, las conferencias, talleres, hasta debates y plática con candidatos-, pero también están los *organismos de la sociedad civil* –sindicatos, organismos no gubernamentales, asociaciones empresariales y de mujeres, etc.- que ya abordan temas de educación y democracia; están los *trabajadores de los medios* y podría pensarse que los *partidos* preparan sus cuadros, pero no siempre es así. La prueba es que sub-utilizan los recursos de actividades específicas o los destinan a otras cuestiones más operativas. Los institutos electorales no se acercan con los partidos para promover programas de formación de carácter cívico –no político- por temor a ser señalados y esto es necesario a fin de intercambiar ideas con ellos, combatir, juntos, el abstencionismo y comprometerlos a inhibir prácticas viciadas que no tienen que ver con la democracia. Estamos, en general, *alejados de las comunidades, especialmente las indígenas y las más marginadas, las estructuras municipales, los funcionarios públicos federales, estatales y municipales; los artistas y el mundo de la cultura* que tanto puede aportar a valores como la libertad; la justicia; la tolerancia; el respeto a la ley, a los individuos, a las ideas, a la naturaleza; el diálogo, la igualdad, la solidaridad, la diversidad, la competencia equitativa, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, etc.

13

En otras palabras, los organismos electorales tienen que ser más protagónicos e imaginativos en sus acciones y desarrollar alianzas estratégicas para impulsar una verdadera cruzada, con instituciones educativas y más allá, a favor de principios y prácticas que hacen a una cultura democrática.

Por último, ya señalaba que la capacitación electoral empezaba antes del inicio formal del proceso electoral, porque la capacitación, entendida como dotar de habilidades físicas y mentales a una persona para desempeñar una tarea, puede, mediante *cambios legislativos*, darse en los propios institutos o en convenios con instituciones académicas, públicas y privadas, para “certificar” habilidades que luego permitan a ciudadanos, voluntariamente, acceder a ser funcionarios de casilla, capacitadores-asistentes, observadores y consejeros electorales. Esto hace que la capacitación recobre su dimensión más integral y no sólo se trate de adiestrar. Esta idea ya se abordó en una ponencia presentada en el Cuarto Encuentro Nacional de Consejeros, sólo la apunto hoy como una propuesta más.

iones



Estoy consciente de que esta idea tiene un impacto, principalmente, en el concepto del azar como hilo conductor de la selección de candidatos a funcionarios de casilla y puede ser, pero es necesario pasar, aunque sea gradualmente, del contenido normativo basado en la desconfianza a las disposiciones que reconozcan las ganas, la voluntad espontánea o comprometida de algunos ciudadanos a participar en tareas cívicas.

La capacitación electoral, decía un Presidente de un organismo electoral que no debía ser un tema toral de esta reunión porque, afirmaba, todos hemos aprendido a rascarnos con nuestras propias uñas, debido a que las legislaciones de una entidad a otra tienen particularidades al respecto, y otro más que decía que el IFE no iba a ser caso de las experiencias de otros organismos debido a que su estrategia es planeada con anticipación y es, generalmente, muy completa, pero rígida –sobre todo por el asunto de la prelación. De ahí el atrevimiento para narrar una experiencia.

14

He participado como Consejero en procesos federales y locales y creo que sí hay vivencias que compartir. Para empezar, planteando el caso de Michoacán, el porcentaje de insaculación es diferente al marcado por la ley federal –es del 15%. Más del 10% de insaculados del listado nominal es un exceso y no resuelve los casos donde faltan ciudadanos para integrar mesas directivas de casilla –regularmente estos casos se salvan por acuerdo de los Consejos Generales; aquí la ley podría establecer reglas para suplir la falta de personas para integrarlas con ciudadanos voluntarios previamente capacitados.

En la forma de notificación a los ciudadanos la experiencia ha sido similar al IFE; también se ha privilegiado la vía de la visita domiciliaria, por parte de un capacitador, a la postal. Al ser así hay que reconocer que no siempre se alcanza a cubrir el cien por ciento de los insaculados, por ello hay la necesidad de adecuar la capacitación a esa realidad.

La notificación, en el caso de Michoacán a diferencia del IFE, se hace por espiral iniciando por los lugares donde tradicionalmente se han instalado las casillas y, a partir de ahí, buscar notificar al máximo posible.

En la anuencia, para nosotros, es muy importante que el ciudadano firme una constancia de no ser funcionario público de nivel medio para arriba ni ser parte de un partido político y, por tanto, de comprometerse a conducirse con imparcialidad. Esto es novedoso y no sabemos que nadie más lo haga.



En la primera capacitación no sólo se entrega un manual del funcionario de casilla sino se le hace consciente al ciudadano de la importancia de su función y al capacitador se le fija una cuota-objetivo a cubrir de ciudadanos capacitados; en promedio, más o menos, tres veces más el número que requiere para instalar la casilla y sus suplentes.

En la estrategia buscamos que el capacitador haga, con el ciudadano, tres contactos que llamamos de calidad después de la anuencia: uno, inicial para reconocer los contenidos del manual, otro para profundizar y familiarizarse con los materiales a utilizar el día de la jornada electoral y otro más para hacer, en equipo, simulacros y aclarar dudas finales. El capacitador, al pasar a ser asistente electoral, ya está compenetrado con los equipos para cada casilla y las rutas para la entrega y regreso de la paquetería electoral.

Por último, toda esta actividad la acompañamos de visitas de campo que hacen los Consejeros Electorales y representantes de partidos políticos, tanto para ubicar lugares de casillas como para realizar monitoreos a domicilio del trabajo del capacitador a fin de constatar que lo estén realizando adecuadamente. El logro ha sido, el día de la jornada electoral, la asistencia de cerca del 99% de ciudadanos insaculados y capacitados para fungir como funcionarios de casilla. Los salarios y prestaciones, incluyendo un seguro de vida, de los capacitadores electorales –que empieza a ser un grupo, en buena parte, experimentado porque labora para el IFE y el IEM tratan de ser iguales o mejores a los que otorga el IFE.

15

En fin, al hacer este recuento sólo trato de mostrar la importancia de considerar el objetivo: contar con ciudadanos imparciales, productos del azar, pero también preparados -tanto por su capacidad y grado de educación como por la capacitación recibida- para ocupar el cargo de funcionario de casilla el día de la elección. La experiencia de cada uno de nosotros y sus resultados, sin duda puede aportar a nuestras estrategias de capacitación, sea el IFE o cualquier instituto estatal.

Bajo esa idea, también es importante estar conscientes de que cada vez que se capacita a una persona que fue insaculada, no sólo estamos preparando a un funcionario electoral sino que estamos forjando ciudadanos que toman conciencia de la importancia de asumir responsabilidades cívicas y de ejercer el derecho a votar –son también promotores de la causa democrática. Estamos cambiando mentes incrédulas por ciudadanos que dan fe de que los votos se

iones



cuentan. En suma, *capacitar electoralmente es también educar para forjar una ciudadanía integral*. Imaginemos cuántos ciudadanos hemos capacitado en los últimos diez años. Hay, ahí, un capital humano importante para la construcción de nuestra democracia.

Espero, por último, que estas reflexiones provoquen mañana, en la exposición de ponencias, el interés de compartir experiencias que nos sean útiles y que saquemos conclusiones provechosas para todos, pero sobre todo que podamos concretar algunas acciones para llevarlas, juntos, a la práctica.

De mi parte, pongo en la mesa de discusiones cinco actividades que creo que nos podrían ser muy provechosas:

1. Hacer una campaña nacional, conjunta, de difusión sobre temas relativos a la promoción del voto libre y secreto y sobre el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones electorales.
2. Hacer carteles sobre principios de la cultura democrática, el valor del voto y folletos que expliquen los puestos que están en juego en la próxima elección, auspiciados por todos.
3. Intercambiar con el IFE información sobre propuestas de Consejeros Electorales para la integración de sus Consejos Locales y Distritales.
4. Intercambiar con el IFE información sobre capacitadores electorales y organizaciones abocadas a la observación electoral para apreciar a aquellos que garantizan imparcialidad y responsabilidad.
5. Apoyar con pláticas y conferencias, y con intercambios más pun-

tuales entre institutos, nuestros programas de educación cívica. Asimismo retroalimentar, con documentos-balance, la observación electoral que hacemos, cuando asistimos como invitados, de nuestros procesos electorales y programas de difusión y promoción a fin de mejorarlos.

No necesariamente todo esto tiene que ver con lo abordado en estas reflexiones, pero son complementarias al propósito inicial: encontrar puntos de encuentro que nos permitan avanzar, eso sí, en las tareas que aquí hemos abordado.



implementación de la votación electrónica, con valor oficial, en el proceso electoral constitucional 2005 en Coahuila

Homero Ramos Gloria*

Primeraamente quiero expresar mi agradecimiento al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), por el espacio que brinda al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila para compartir con ustedes los trabajos que hemos llevado a cabo para implementar la votación electrónica con valor oficial en el proceso electoral constitucional 2005, mediante el cual los coahuilenses renovaremos los cargos de Gobernador, diputados locales y los 38 ayuntamientos de la entidad, en la jornada electoral que se verificará el próximo 25 de septiembre.

17

La presentación de este trabajo la realizaremos en tres partes: La primera estará dirigida a los antecedentes que tenemos con la votación electrónica; en la segunda parte les compartiremos las actividades que desarrollamos para la implementación de este sistema digital en el proceso electoral y; la tercera, está destinada para explicar los aspectos técnicos del propio sistema.

PRIMERA PARTE: Los antecedentes.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila por invitación del Instituto Electoral del Estado de México participó en el “Primer Encuentro Nacional de Informática Electoral”, en la ciudad de Toluca, Estado de México los días 27 y 28 junio de 2002.

Los temas más relevantes que se manejaron en dicho encuentro estaban relacionados con los sistemas de apoyo para el proceso electoral, los programas de resultados electorales preliminares, la cartografía electoral y la votación electrónica. Este último tema fue el que despertó mayor interés en los participantes, siendo sus principales impulsores hasta esa fecha el propio Instituto Electoral del Estado de México y la Comisión Estatal Electoral del

* Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila.

iones

Estado de Nuevo León. De esta manera este organismo electoral tiene sus primeros contactos con los sistemas de votación electrónica.

En ese mismo año por su parte la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León realiza dos eventos. El primero de ellos tiene lugar en el mes de julio del año 2002 en el que se presentan las características generales que, en su concepto, debía reunir un sistema de votación electrónica. En el segundo de estos eventos, efectuado en noviembre del mismo año, se presentan los proyectos de votación electrónica desarrollados por las autoridades electorales de Brasil, Venezuela y del país Vasco. Destaca en ese evento la información compartida por el Tribunal Electoral de Brasil en el sentido de que las experiencias con la aplicación de la votación electrónica habían sido hasta ese momento muy exitosas, y que se había cubierto al 100% de los electores con su sistema de votación, circunstancia que había sido implementada en un período de diez años.

Teniendo como referencia estos antecedentes y realizando estudios e investigaciones de otros sistemas de votación electrónica en el mundo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila incursiona en el diseño de una urna electrónica propia, contando con un primer prototipo en el mes de diciembre de 2002. A la par se desarrollan los primeros sistemas de *software* para votación electrónica.

Es así como en marzo de 2003, se presenta oficialmente ante la sociedad mexicana y autoridades nacionales y coahuilenses el sistema de votación electrónica desarrollado por el Instituto, con la presencia de instancias federales en materia electoral.

De esta manera y a partir de dicha presentación, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila ha suscrito diversos convenios de colaboración con instituciones educativas, organismos electorales estatales y otras instancias a efecto de implementar la votación electrónica en diversos procesos electorales, con el objeto de elegir directivos universitarios, delegados partidistas, sociedades de alum-





nos, valores infantiles, dirigencias partidistas, cuyos cargos ya vienen desempeñando y que han sido resultado de procesos electorales digitales. Es de mencionarse también que como procesos electorales vinculatorios son los primeros, y los únicos a la fecha, en el país que se han realizado vía electrónica, con el sistema de votación desarrollado por este organismo electoral.

Es importante mencionar también que hemos tenido oportunidad de participar en más de cincuenta procesos electorales, en su mayoría con carácter vinculatorio, que se dividen en cuatro grandes rubros:

1. Elecciones universitarias:

a). Universidad Autónoma de Coahuila

- Escuela de Odontología, para elección de Director.
- Facultad de Jurisprudencia, en dos vueltas, para la elección de Director.
- Facultad de Ciencias Políticas, para elección de Director.
- Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, turno vespertino - nocturno, para la elección de Director y de Consejeros Directivos Alumnos.
- Escuela de Música, para elección de Director.
- Facultad de Economía, para elección de Director.

19

b). Universidad de Guadalajara. Estado de Jalisco

- Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en el municipio de Guadalajara
- Centro Universitario de la Costa Sur, en el municipio de Autlán
- Centro Universitario del sur, en el municipio de Ciudad Guzmán.
- Escuela Preparatoria de Jalisco, en el municipio de Guadalajara
- Escuela Preparatoria Regional de la Barca, en el municipio de La Barca y Jamay.

En todos los planteles de la Universidad de Guadalajara señalados se realizó la elección para Consejeros del Consejo General Universitario, Consejo de Centro, Consejo Divisional, Consejo Universitario de Educación Media Superior y Consejos de Escuela Preparatoria.



c). Universidad Autónoma de Querétaro

- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para la elección de la Sociedad de Estudiantes y Consejeros Universitarios

**d). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Campus Monterrey**

- Escuela de Ingeniería Industrial y de Sistemas,
- Escuela de Contaduría Pública y Finanzas,
- Escuela de Licenciatura de Agronegocios,
- Todas ellas para la elección de la Mesa Directiva de su Sociedad de Alumnos.
- Todas las carreras del ITESM Campus Monterrey, para la elección de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

**2. Elecciones de Partidos Políticos
Partido Acción Nacional**

20

- Elección de Consejeros Nacionales y Estatales del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Ejecutivo Estatal de Nuevo León.
- Elecciones del Comité Directivo Municipal de Saltillo, para la elección de sus dirigentes partidistas en esa municipalidad.
- Actualmente analizan la posibilidad de elegir al candidato a Gobernador con dicho sistema digital.

3. Elecciones Juveniles

a). Elección de Ayuntamientos Juveniles, en el Estado de Chiapas, organizada por el Instituto Electoral de esa entidad federativa. La elección se celebró en dos escuelas secundarias y una preparatoria de los siguientes municipios:

- Tuxtla Gutiérrez
- San Cristóbal de las Casas; y
- Tapachula

b). Escuela Secundaria Técnica N° 13 de La Concha, en Torreón, Coahuila, para elegir su sociedad de alumnos.



c). Colegio “María Álvarez de Rodríguez”, Escuela Secundaria privada de Saltillo, Coah., para elegir su sociedad de alumnos.

4. Elecciones Infantiles

a). Elecciones Infantiles Chihuahua 2004. Ejercicio organizado por el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua para elegir de entre seis temas que involucran el mejoramiento de su entorno social y de la calidad de vida. Ejercicio que se celebró en español y en los dialectos de alto y bajo tarahumara. Esa elección tuvo verificativo en los siguientes municipios:

- Buenaventura
- Guerrero
- Ascensión
- Guachochi
- Aldama
- Parral
- Namiquipa
- Madera
- Nuevo Casas Grandes
- Cuauhtémoc
- Santa Bárbara
- Jiménez
- Camargo
- Meoqui
- Delicias
- Ciudad Juárez; y
- Chihuahua.

21

b). Elecciones infantiles en el marco de las Jornadas Cívicas infantiles en el municipio de Arteaga, Coah. Los infantes asistentes votaron entre los nueve valores democráticos que integran la boleta electoral. El ejercicio de referencia tuvo lugar en los siguientes ejidos de esa municipalidad:

- San Antonio de las Alazanas
- Huachichil
- El Tunal
- Jamé
- Escobedo
- Sierra Hermosa; y
- Artesillas.

Finalmente, es de destacarse que en todo momento, buscando la compatibilidad entre el nuevo sistema de votación y la forma tradicional de ejercer el sufragio, en todos los procesos electorales en los que este organismo ha participado con la votación electrónica, invariablemente siempre se han

iones



garantizado los principios básicos del voto como un derecho universal, cuyo ejercicio es libre, secreto y directo. Paralelo a ello siempre se ha brindado la seguridad y la auditabilidad de este sistema.

En su interés de mejora continua en los rubros de la ergonomía, el traslado y el almacenamiento de las urnas electrónicas, a la fecha el Instituto ha desarrollado tres prototipos de urna electrónica, los cuales comparten los mismos elementos fundamentales. No obstante ello, el Instituto continúa realizando investigaciones y estudios al respecto.

22

Ante tales antecedentes, en sesión ordinaria del mes de septiembre, los partidos políticos integrantes del Consejo General del Instituto propusieron que se implementara con valor oficial en el proceso electoral 2005 la votación electrónica, por lo que nos dimos a la tarea de construir conjuntamente este importante proyecto que estamos ciertos es trascendental para el fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país.



voz y voto: ciudadanía integral

Gustavo Fernández Saavedra*



Nuestros días dan cuenta de levantamientos sociales en muchas naciones de América Latina, inestabilidad política, presidentes derrocados y partidos descalificados. La intensidad de estos varios síntomas es distinta, dependiendo de los países y de las regiones. Cada uno de nuestros países enfrenta sus propios problemas democráticos, pero si uno mira la región desde la perspectiva continental, observará que, de una u otra manera, con mayores o menores grados de intensidad se presentan estos inquietantes síntomas de la fragilidad de una democracia que costó tanto conquistar.

El Informe de Naciones Unidas, señala con claridad el hecho de que somos *libres pero no somos iguales*, de que hay déficit de ciudadanía civil y social en el trasfondo de los problemas que no ha podido resolver la democracia liberal.

23

La democracia social es negada a millones de latinoamericanos; no se atienden adecuadamente las necesidades básicas. Una inmensa parte de la población del continente tiene necesidades básicas insatisfechas de educación y salud, y se comprueba un bajo nivel de integración social: desempleo, subempleo, pobreza, desigualdad; a fin de cuentas, América Latina es la región con mayor desigualdad del planeta; una indigencia del 20% es el promedio; una pobreza cercana al 50%.

La ciudadanía integral, que debiera ser la respuesta al déficit que he anotado, es un hecho político, es un hecho social que requiere una expresión jurídica y una cristalización institucional para ponerse efectivamente en práctica.

* Ex canciller de Bolivia.

La observación de los fenómenos que dan origen a la pobreza y a la desigualdad, como freno al impulso de la democracia latinoamericana puede llevar a plantearnos, como lo han hecho algunos analistas en el Norte sobre todo, la pregunta de si el desarrollo no debiera preceder a la institucionaliza-

iones

ción de la democracia, si no debiéramos eliminar primero la pobreza para pensar después en la democracia. En la práctica, en el período de lucha sudamericana contra las dictaduras militares, ese argumento fue esgrimido varias veces para señalar que los países que, cuyo ingreso por habitante era inferior a mil dólares por año, no tenían derecho a la libertad y a la democracia.

Hoy día, el nivel de esa condición se ha elevado a 6 mil dólares americanos, ya no mil dólares de la década de los años 60's, el profesor *Farid Zacarías* afirma que: *la democracia sólo es viable en la medida en que se haya conseguido previamente un nivel relativo de bienestar económico*, esa afirmación que se utilizó en el período de la lucha contra la dictadura es claramente rechazada en la visión social del continente americano.

La democracia es una condición esencial de la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad; eso hace que la democracia sea al mismo tiempo el objetivo y el camino; la democracia es el instrumento de lucha contra la desigualdad y contra la pobreza. Pero la afirmación de que debemos ir más allá de la democracia electoral para conquistar la ciudadanía integral que es el elemento central, el punto focal del Informe de la Democracia en América Latina, no puede hacernos perder de vista el hecho esencial de que la democracia política es la condición necesaria para alcanzar la ciudadanía integral.

Podemos, en la valoración de la necesidad de ir más allá de la ciudadanía electoral para avanzar en el terreno de la ciudadanía social, eliminar la discriminación, la desigualdad y luchar por la ciudadanía social, que permita al ciudadano latinoamericano alcanzar los niveles de bienestar esenciales para su existencia. No puede llevarnos al riesgo de subestimar la extraordinaria importancia de la democracia, porque lamentablemente como lo está probando la experiencia de varios países, los avances de las décadas pasadas en la consolidación de la democracia política y de la democracia electoral que por lo demás están señaladas con claridad en el Índice de Desarrollo Electoral del Informe, esos avances no son irreversibles, hay serias amenazas a la autonomía de los órganos electorales en varios países, hay señales inequívocas de concentración de poder y de tentaciones autoritarias en varios países Sudamericanos.

La democracia política, que en algún momento pensamos con optimismo, se había consolidado, está amenazada con señales inquietantes de inestabilidad y fragilidad; la lucha por la consolidación de la ciudadanía política



no ha concluido, esa es una condición necesaria para el avance en la lucha por la ciudadanía.

Esta debilidad, encuentra su manifestación más precisa en la fragilidad del sistema político latinoamericano, del sistema partidario latinoamericano; se ha señalado- y el Informe lo subraya- el debate del año pasado permitió comprobar la validez de esas afirmaciones; y que el sistema político latinoamericano sufre una aguda crisis de representación: la pobreza, la desigualdad, el desencanto con el mercado, la presencia de nuevos actores de la sociedad civil, de los medios de comunicación; explican en buena medida, la crisis y los problemas de la democracia latinoamericana; pero los Partidos como tales, tienen seria responsabilidad en las manifestaciones de corrupción, de clientelismo y de caudillismo que se observan y se discuten con tanta frecuencia en el continente y que se refleja en la actitud que los ciudadanos tienen respecto del sistema partidario.

El Informe señala que la confianza en los Partidos Políticos cayó del 20% en 1996, a un 11% en el año 2002; señaló que: sólo el 14% de los encuestados tiene confianza en el Partido, y el 65% tiene la convicción de que los Partidos sólo contienden para llegar al poder y algunos, cerca del 40%, creen que es posible avanzar en democracia sin Partidos Políticos; esa sensación de agotamiento de intermediación de los partidos, es, sin ninguna duda, una de las razones principales de los problemas que confronta la democracia latinoamericana.

25

Lo voy a decir, en la experiencia concreta de mi país, Bolivia, el colapso del sistema partidario ha fortalecido la presencia de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación, como elementos centrales de la intermediación entre el ciudadano y el Estado. Pero esa acción, en la que cada una de las organizaciones de la sociedad civil representa intereses particulares, no logra la agregación necesaria para la visión de conjunto al desarrollo político y democrático de mi país. La sensación de desor-



iones



den, que en algunos casos conlleva a la anarquía y el caos, es la sensación que ha vuelto a ponerse de manifiesto en el caso concreto de mi país. Creo que esa es una señal extrema que, en su momento, podrá encontrarse también en algunos países de América Latina y la necesidad de recomponer el sistema político como condición de la afirmación democrática.

26

El hecho es, en el caso de mi país, que con los Partidos que tenemos la democracia está amenazada. Los Partidos Políticos que tenemos rompieron la relación que sostenían con la sociedad, ya no la representan, pero en su ausencia es casi imposible construir un sistema democrático y un plan de desarrollo ordenado; es decir, la experiencia concreta de países como Bolivia demuestra la necesidad de los partidos políticos como el eje de articulación de los sistemas democráticos latinoamericanos. Eso lleva a la necesidad de pensar, y esa es una experiencia con varios países sudamericanos, de revalorizar la política como condición de la reconstrucción de la democracia en América Latina, pero con nuevos partidos políticos que sean efectivamente capaces de incluir a los que estuvieron a lo largo de todos estos años, que sean capaces de representar a quienes los eligieron, que sean capaces de unir al país, a las regiones y a sectores que ahora actúan de manera dispersa y desordenada a través de la sociedad civil; un sistema de partidos políticos que encuentren una nueva forma de relacionarse con la sociedad civil que tomó su lugar en el escenario público y no se va a retirar. De ahí, la necesidad urgente de encontrar un mecanismo de articulación entre esa sociedad civil y los instrumentos de la sociedad política.

En el caso de Bolivia, -perdónenme que recurra tantas veces, al ejemplo de mi país, pero es el que tengo más próximo- la reconstrucción del sistema político, probablemente se origine en las autonomías regionales, esta es la base, movimientos que surjan desde la región, desde los departamentos, para articular un nuevo sistema político que efectivamente represente al país. Un proceso de renovación de las élites de conducción del país, que mire en proyectos históricos de largo plazo la articulación de los distintos intereses de las regiones bolivianas. Alguna vez, en alguna discusión política boliviana, me atreví a señalar que *"un líder sin partido es un caudillo y que un partido sin proyecto histórico que represente a la sociedad en su conjunto puede derivar en un club de negocios"*.

La necesidad de un proyecto histórico que nazca desde las bases y que refleje efectivamente una nueva articulación del pensamiento social y político



parece esencial en mi país y creo que en cierta medida es importante para otros países de América Latina.

La concertación entre los Partidos Políticos es un dato central de la construcción democrática; el diálogo en democracia es el instrumento principal de la condición democrática, ese diálogo en mi país fue la explicación de los avances importantes que se produjeron en Bolivia a lo largo de los 20 años de conducción democrática, pero lamentablemente también, el ejemplo es que, ese diálogo alejado de los intereses de la sociedad, puede terminar en lo que terminó en Bolivia. He hablado demasiado de Bolivia, lo he hecho con el ánimo de transmitir una experiencia concreta que pone en claro las afirmaciones de carácter general que contiene el Informe de Naciones Unidas sobre la Democracia en América Latina.

Pero si hay una crisis de representación de los partidos políticos, hay también una crisis de contenido de los instrumentos que la democracia tiene a su alcance para consolidar un proceso de desarrollo económico y político, acorde con las necesidades de nuestra región.

A lo largo de estos últimos 20 años, se aplicó en América Latina, de manera en algunos casos extremos, el pensamiento de que el Estado era el problema y no parte de la solución. El desmantelamiento del Estado fue el componente ideológico de la reforma estructural que se llevó adelante en América Latina, en los países de la región, a lo largo de estos 20 años, con el resultado claro de vacíos y carencia de institución; hoy día esto ya se reconoce. Milton Friedman hizo unas declaraciones, hace un par de años, en las que señalaba que hace 20 años, cuando le preguntaban “¿cuál era el remedio para los problemas de América Latina?”, hubiera dicho: *privatizar, privatizar, privatizar*; y, en cierta medida, ese consejo se aplicó en la región; hoy, Friedman dice: me equivoqué, en realidad el orden jurídico es más importante que la privatización; es decir, el Estado es más importante que la privatización; y, ciertamente, los problemas de América Latina hoy son problemas de ausencia antes que de exceso de Estado.

El Estado Latinoamericano hoy no afirma su presencia en todo el territorio, no ofrece seguridad jurídica a todos; no controla los grandes poderes que operan en su territorio y ha perdido poder como centro de unidad, orden y decisión, eso pone de manifiesto la necesidad de construir otro Estado, capaz de expandir la ciudadanía, que busque la cohesión social y trate de generar

un lugar en que los diferentes dialoguen y se pongan de acuerdo. Un Estado que no puede ser paternalista previo a las reformas electorales y tampoco puede ser el Estado neoliberal cuyos defectos estamos sufriendo; las virtudes y los defectos de ambos Estados son conocidos y creo que nadie busca, nadie tiene nostalgia de uno y el otro, eso nos obliga a mirar la construcción del Estado latinoamericano desde una perspectiva distinta a la que hemos juzgado hasta ahora: un Estado del siglo XXI capaz de resolver los problemas de la globalización que sacan de la órbita de decisión propiamente nacional muchísimos aspectos de la vida económica y política, capaz de incorporar, en la construcción de un nuevo Estado, los intereses de las distintas regiones de América Latina.

Se privilegió un Estado en el que el mercado predominó sobre la lógica de la democracia y la política; se afirmaron valores superiores a los de la voluntad de la gente en la lógica de la construcción del mercado. El resultado ha sido un círculo vicioso: un sistema democrático, inestable y frágil, que no puede ofrecer seguridad ni perspectiva al mercado; en lugar de contribuir a la cohesión social se ha terminado por fragmentarla a través de aumentar la desigualdad y la pobreza.

La necesidad de romper ese círculo vicioso y plantear uno distinto donde el desarrollo económico ofrezca elementos para aumentar la cohesión social y esa cohesión social permita a la democracia dar seguridad y confianza al mercado, parece ser una de las tareas más

importantes para la región, ante sí, en estos años.

Eso implica, desde luego, trabajar en la órbita de las competencias del Estado en una lógica distinta de relación con la sociedad, pero implica también, al mismo tiempo, mirar con seriedad la capacidad del Estado para concretar sus objetivos. No se trata sólo de ampliar el espacio de las funciones del Estado, sino de mirar, con la misma seriedad, la capacidad que éste tenga para conseguir los propósitos señalados.

Por último, es importante destacar que uno de los principales objetivos de la región en la consolidación de sus procesos democráticos es salir de la ciudadanía política para transformarse en la ciudadanía social; y de la ciudadanía civil a la ciudadanía integral. Es decir que reconstruir, recomponer y revalorizar los instrumentos políticos parece ser una condición necesaria de la acción democrática latinoamericana, y reconstruir un Estado que sea capaz de resolver los problemas de la exclusión, de la pobreza, son los asuntos que el Informe señala como puntos centrales de esa gestión; en esos elementos, ciudadanía, política y Estado, se reflejan las principales conclusiones del Informe sobre la Democracia en América Latina, que he tenido el privilegio de presentarles.



las elecciones que vimos: la elección de gobernador en el estado de México

Manuel García Urrutía M.*

El domingo 3 de julio de 2005, hubo elecciones en dos estados del país para elegir Gobernador: el Estado de México y Nayarit. Mientras que en el primero se votó sólo para gobernador, debido a que el Congreso Local y los Presidentes Municipales son renovados hasta marzo del año que entra, en el segundo se votaron, además, por diputados locales y ayuntamientos.

Esta separación de elecciones explica, en parte, por qué mientras que en Nayarit hubo una participación electoral del 60%, en el Estado de México sólo se alcanzó el 42%. Es obvio que estando en juego un mayor número de cargos que son, incluso, más cercanos a la ciudadanía, el interés en las elecciones aumenta -sobre todo si la popularidad de los candidatos augura una competencia cerrada. Así, mientras que en Nayarit los resultados arrojan una diferencia mínima entre los contendientes del PRI y la Coalición formada por el PRD, el PT y un partido estatal, en el Estado de México la diferencia es abismal entre el primero, el candidato de la Coalición PRI y Verde Ecologista, y el segundo de la Coalición entre PAN y Convergencia. No obstante, en ambos casos es previsible suponer que las elecciones serán impugnadas y, por tanto, serán los Tribunales Electorales –primero el estatal y luego el federal– los que digan la última palabra.

Estando ya a un año del próximo proceso electoral para elegir Presidente de la República es conveniente sacar lecciones de los comicios anteriores, particularmente del Estado de México porque hay quien afirma que esa elección representa una prueba para el avance de nuestra democracia.

Lo primero a reconocer es el trabajo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que, a pesar de estar recién electo, pudo rescatar algo de la reputación afectada por los anteriores miembros del

29

* Licenciado en Administración de Empresas. Profesor de la Universidad Latina de América en Morelia. Analista Político. Consejero Electoral Propietario del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IEM.



mismo, debido a los problemas provocados por la falta de claridad en la asignación de la empresa que se encargó de proveer parte de los materiales electorales a usar el día de la jornada electoral.

La denuncia de corrupción que involucró a funcionarios y a algunos Consejeros Electorales ha mermado la credibilidad en la institución electoral y ha dado armas a los actores políticos contrarios a consolidar los procesos de ciudadanización en las instituciones públicas –como forma de vigilar el desempeño de los organismos, de llevar a la práctica la rendición de cuentas y participar en el diseño y legitimación de políticas públicas-. Es difícil señalar si ese escándalo –que terminó con la destitución, por parte del Congreso Estatal, del Presidente y todos los Consejeros Electorales del anterior Consejo General- incidió en la participación de los ciudadanos a la hora de votar, pero sí es claro que impactó en la confianza, en el ambiente electoral -metiéndole más ruido al que ya generaba el proceso electoral- y en la campaña de promoción del voto al quedarse trunca la difusión y ser, además, muy polémica.

30

El dispendio de los miembros del Consejo General despedidos -acusados, incluso, de darse una jugosa liquidación-, hizo daño más allá de su propia institución, sin embargo el Presidente y los nuevos Consejeros Electorales – con el apoyo del personal profesional y administrativo del IEEM- lograron enderezar el rumbo y presentar cuentas positivas de la elección, en sus aspectos formales, a la sociedad michiguense con una jornada pacífica, un programa de resultados electorales preliminares –organizado por el propio Instituto- que funcionó oportuna y razonablemente bien; y las sesiones de conteo de votos y calificación de la elección se desarrollaron sin contratiempos.

Lo segundo a desmitificar de ese proceso es el poder de la mercadotecnia en la política. Si bien es cierto que ha existido un derroche impresionante de recursos utilizados para las campañas y que incluso el Gobernador actual del Estado de México no suspendió nunca la difusión de la obra pública –el colmo es que exista en la misma acera del Instituto Electoral del Estado de México un espectacular exaltando su gestión-, no alcanzó tal estrategia para motivar la participación ciudadana en las urnas. Un abstencionismo del 58% es la evidencia –de un universo de casi 9 millones de electores, sólo votaron alrededor de 3 millones 700 mil.



Si el propósito de la mercadotecnia, y más de la publicidad, es persuadir al ciudadano –visto como un “consumidor” de productos políticos- para “comprar” la opción que puede representar un partido y/o la imagen de un candidato, está claro que en política esa función es condicionada también a otros factores.

Empero podría pensarse, entonces, que la mercadotecnia –el manejo de la imagen y la oferta, que no necesariamente representa la ideología partidaria- contribuyó a determinar el sufragio de ciudadanos indecisos que complementaron el voto duro de los militantes y simpatizantes convencidos de una opción política, independientemente del candidato. En parte es cierto, pero no en forma significativa si se toma en cuenta que la cantidad de votos obtenida por quien encabeza las votaciones representa a casi dos de cada diez electores –lo cual afecta la legitimidad- y en términos de la votación registrada históricamente, representa alrededor de 400 mil votos más. Esos votos, en un análisis más profundo, son votos que en 1999 fueron, en buena parte, para el PAN –el PRD obtuvo una ligera mejoría en relación a la votación de ese año.

Este hecho, el cambio del sentido del voto –el cambio de “marca”-

puede ser atribuible a la vistosa campaña publicitaria del abanderado del PRI, pero también a los errores y falta de presencia de sus rivales.

Esto no quiere decir que la publicidad no juegue un papel en la estrategia política de la campaña. Lo hace a nivel de la percepción. Apoya



31

la impresión de un candidato seguro y con un buen posicionamiento de su imagen –difícilmente de la propuesta de gobierno cuando las frases de campaña son tan generales y sintéticas: más escuelas, más guarderías, más seguridad y “te lo firmo”. Los que no votan –por no ser del lugar- o los que no tienen definida una posición política, son más influidos y juegan un papel como opinión pública que sirve para forjar una idea –un “concepto”- del candidato (y los resultados esperados de la elección). La estrategia publicitaria lo que busca garantizar, en ese contexto, es la percepción

iones

expres

colectiva de que hay un candidato ganador con una diferencia tal que las impugnaciones que se presenten no puedan echar a bajo la elección dada la distancia entre el primero y el resto de los contendientes.

Es por ello, en tercer y último lugar, que resultó impresionante, el día de la elección, el despliegue de la estructura partidaria y gubernamental para inducir el voto y para llevar a votar a los que estaban comprometidos, de alguna manera, con el partido (y el gobierno estatal) en las zonas que tradicionalmente controla. Ahí fue donde las diferencias entre el ganador y los opositores se dispararon en proporciones de tres a uno. Ni siquiera hubo, en muchos lugares de esos, representantes de los partidos opositores en las casillas.



En suma, pueden concluirse cuatro cosas: Uno, el IEEM, a pesar del ambiente que presagiaba una jornada electoral conflictiva, pudo realizar bien y con transparencia su trabajo y rendir buenas cuentas a la sociedad –claro, siempre con el apoyo de la ciudadanía, en gran parte mujeres, que acudió a cumplir su función como funcionarios de casilla-; dos, la campaña mercadológica funciona cuando está acompañada de un buen trabajo de



amarres y organización; tres, que el partido ganador –por las razones que se quiera: porque lo necesitaba Arturo Montiel para sus aspiraciones presidenciables o para protegerse, o porque es la entidad bastión del grupo político más importante del país, etc.- fue el único, en relación a su oposición, que tomó en serio el proceso electoral; y que hoy, a diferencia de antes, efectivamente ya son los votos los que deciden quien gana una elección; lo que está pendiente para las elecciones del 2006, en especial la presidencial, es la calidad de ese voto que aún no se emite libremente. La compra y coacción, la inducción del voto, es el gran desafío a superar para todos los comprometidos con la consolidación democrática.



Antonio Alanís Huerta



Jesús Cantú Escalante



Ernesto Hernández Norzagaray



W. Humberto Vázquez Rubio





ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

..

autonomía y funcionamiento de los organismos electorales



¿cómo se relacionan los organismos electorales con los poderes públicos y los partidos políticos?

Dr. Antonio ALANÍS HUERTA*

Presentación.

Los organismos electorales en los estados de la república cumplen la misma función de realizar las elecciones locales de Gobernador, Diputados al Congreso y Ayuntamientos. Y en algunos casos también organizan *referendums* y plebiscitos.

Sin embargo, en cada entidad del país, las relaciones con los poderes públicos y los partidos políticos adquieren matices propios; es decir, las relaciones y el funcionamiento de estas instituciones electorales, más allá de los preceptos legales, obedece en gran medida a la manera como los presidentes y consejeros de los institutos se relacionan con los sujetos que integran estas organizaciones del Estado; al igual que con los medios de comunicación. Y en este sentido, cabe decirlo, los órganos electorales tratan de llevar una buena relación con el poder ejecutivo y el legislativo; con los partidos políticos y con los medios de comunicación; manteniendo a salvo la autonomía institucional y la independencia en la toma de decisiones.

Este ha sido uno de los grandes temas que fue analizado y discutido en el Cuarto Congreso Nacional de Consejeros Electorales Estatales, desarrollado en la ciudad de Morelia, Mich., los días 12, 13 y 14 de abril de 2005. Derivándose, incluso, una serie de propuestas para el trabajo coordinado de los Consejeros en sus respectivos institutos de origen.

A continuación se presentan algunos de los ejes temáticos propuestos para el análisis y la discusión en la Mesa de Trabajo No. 3, así como algunas preguntas que se plantearon para ser consideradas como guía inicial del intercambio de ideas y opiniones sobre lo que pasa en los organismos electorales del país; lo que ayudaría, pretendidamente, a enriquecer el trabajo deliberativo.

* Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Caen, Francia. Profesor Titular del Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán (CAMM). Consejero Electoral Propietario, integrante del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Coordinador General de la Mesa No. 3.



1. Los procesos de integración de los organismos electorales: un sumario temático inicial.

En cuanto al origen de las propuestas de consejeros electorales:

- Las propuestas de los partidos políticos
- Las propuestas de los organismos civiles y académicos
- Las propuestas de los organismos y sectores empresariales
- Las convocatorias públicas

En cuanto al perfil deseable de los consejeros electorales:

- El perfil de experiencia electoral
- El perfil de trayectoria académica
- El perfil de conocimiento político
- El perfil gremial
- El perfil empresarial
- El perfil administrativo
- El perfil de trayectoria ciudadana

En torno a cada uno de los orígenes de las propuestas y de los perfiles de elección se consideran diversas preguntas, relacionadas entre sí. Por ejemplo, ¿Cuál es el peso específico de las propuestas de partidos políticos? ¿Bajo qué procedimientos se integran las propuestas provenientes de los organismos sociales, civiles y académicos? ¿Cómo se consensuan las propuestas de los organismos y sectores empresariales? En cuanto a su origen, ¿Cuáles son las propuestas que pueden tener mayor viabilidad?

Respecto del perfil deseable del consejero electoral, ¿Cuál es el perfil de mayor elegibilidad? ¿Cómo se configuran las propuestas para ser consejeros electorales en los congresos de los Estados? ¿Cuáles son los procedimientos de elección? ¿Las propuestas de consejeros electorales, se definen por consenso o por cuota partidaria?

Estas son, entre otras, las preguntas lanzadas a la Mesa de Trabajo No. 3 del Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Estatales. Y las apreciaciones y opiniones fueron diversas; y en ellas se dejó sentir la convicción de que independientemente de los orígenes de las propuestas, una vez electos los consejeros electorales, se deben al cumplimiento de la ley de la materia; al

37

iones

esfuerzo por fortalecer los procesos democráticos de las elecciones locales; y principalmente, están obligados a cumplir la función ciudadana encomendada por las constituciones políticas locales; pugnando siempre por fortalecer nuestra democracia, la competencia equitativa entre los partidos políticos y contribuir a dar certeza a los ciudadanos en torno al cuidado de su voto, a su validez y a su destino efectivo en la dirección que eligió, otorgándolo al candidato y partido de su preferencia.

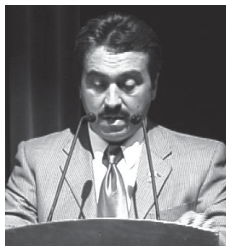


38

Por último, se planteó que cualesquiera que haya sido el origen de las propuestas de consejeros electorales, con la experiencia adquirida en el desarrollo de la función, al término del primer año se adquiriría la competencia necesaria y el redondeo del perfil de consejero electoral completo para el ejercicio pleno de la responsabilidad ciudadana.

2. Las decisiones de los Congresos Locales: entre el perfil y la coyuntura.

Este tema ha sido planteado para su discusión en cinco apartados, a saber:



- ♦ Los perfiles de elección
- ♦ Las coyunturas políticas
- ♦ Los grupos de poder político
- ♦ Los grupos de poder económico
- ♦ Los grupos de poder gremial

En este mismo ámbito se deja planteada la pregunta central del tema, ¿Cómo se llega a la decisión final? Y para completar el análisis temático se



señalan algunas experiencias de elección que tienen que ver con el equilibrio político de los órganos electorales, donde la experiencia en la materia juega un papel determinante.

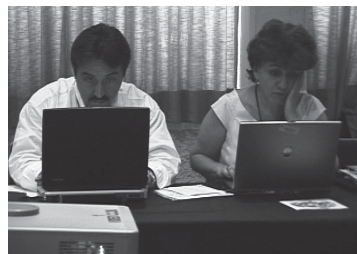
El juego político para la elección de los consejeros electorales se registra principalmente en los partidos políticos; en algunas esferas de gobierno y en los grupos sociales; y por supuesto en los grupos de consejeros electorales que han participado en otros procesos de elección, tanto federales como estatales. Sin embargo, la fase final se define por la confluencia de factores de coyuntura, donde hacen presencia los diferentes grupos organizados con poder de propuesta y de decisión; tal es el caso de los grupos políticos, los empresariales, los académicos y los gremiales. En cada uno de estos grupos de influencia y decisión se configuran nombres, fórmulas y *curricula vitarum* de los aspirantes; se analizan virtudes y defectos; experiencias y personalidad; evidencias de competencia y de propuesta; congruencia y seriedad. Pero principalmente se analiza la capacidad de diálogo, convicciones, vocación democrática, imparcialidad y profesionalismo. Se analizan actuaciones profesionales, políticas, académicas y producciones escritas sobre temas políticos, electorales y democráticos.

Y sin embargo, la decisión final es coyuntural hasta el último momento.

3. Las relaciones de los organismos electorales con los poderes del Estado y con los partidos políticos: *una relación de respeto mutuo.*

En la mayor parte de los estados del país los organismos electorales gozan de autonomía e independencia del poder ejecutivo; e incluso en aquellas entidades donde aún a los presidentes o a los consejeros los propone el gobernador del estado, en el desarrollo de sus responsabilidades ejercen la autonomía que la función exige. Por lo que en un primer balance se podría afirmar que la independencia y la autonomía de los órganos electorales se han venido consolidando como los pilares de la construcción de confianza ciudadana; y si bien es cierto que aún nos quedan trechos importantes que recorrer como país democrático, también es justo señalar que los esfuerzos que hemos desplegado por consolidar espacios y escenarios de participación democrática, plural e incluyente, no han sido del todo en vano.

39



iones



Hasta ahora, salvo cada vez menos excepciones, las relaciones entre los organismos electorales y los poderes del estado han sido de respeto mutuo; sin embargo, en algunas entidades, las menos, aún se dan las persecuciones de consejeros por líderes políticos de partidos porque discrepan de sus posiciones en los medios o en los posicionamientos en las sesiones de consejo general; lo cual contraviene el ejercicio del derecho de libre expresión. Por eso es importante instrumentar el fuero constitucional para los consejeros electorales, en las constituciones políticas de las entidades donde no esté considerado. De esta manera, se podrá participar de forma más efectiva, y de manera colegiada, en el tratamiento de temas de interés común. ¿Pero cómo debe ser la relación política e institucional con los poderes ejecutivo y legislativo, así como con los partidos políticos? ¿De discreción y de sana distancia? ¿De abierta cooperación? ¿Escasa y ausente?

40

Es evidente que los organismos electorales hoy no pueden encerrarse en sus cuatro paredes; es un grave error hacerlo; en otros tiempos, una vez pasado el proceso electoral, los institutos electorales desaparecían prácticamente de la vida pública. No había presencia alguna de sus actividades en las escuelas, en los clubes, en las universidades, los sindicatos o las organizaciones de la sociedad civil para la promoción de los valores de la democracia; y por supuesto tampoco estaban más en los medios de comunicación.

En la actualidad es necesaria la participación pública de los organismos electorales, ya sea en debates políticos, en la difusión de materiales para fomentar y fortalecer la educación cívica. Pero fundamentalmente se requiere la presencia permanente de los organismos electorales en la conciencia ciudadana; para lo cual los medios masivos de comunicación juegan un papel estratégico; pero esta presencia no puede ser sólo declarativa sino, y principalmente, efectiva; es decir, con el desglose de programas de educación cívica en escuelas de educación básica, media superior y superior. Desarrollando investigaciones sobre cultura democrática y participación ciudadana; publicando libros y revistas sobre temas de política, democracia y procesos electorales; participando en congresos, elecciones locales en otros estados del país; en suma, participando y haciendo cultura política y democrática en los entornos posibles.



4. La estructura institucional y profesional de los organismos electorales: coadyuvantes operativos.

Respecto de este tema que regula y da vida a los organismos electorales en su faceta administrativa, se ha puesto el acento en asuntos vinculados con:

- ♦ Las relaciones laborales intrainstitucionales
- ♦ La selección y contratación de los funcionarios
- ♦ El servicio civil de carrera
- ♦ El desarrollo institucional estratégico
- ♦ La integración de los Comités Distritales y Municipales Electorales
- ♦ La participación e influencia de los partidos políticos en la vida institucional

De entrada, se rechaza la intromisión de los partidos políticos en la regulación de las actividades administrativas de los institutos electorales; dejarlos entrar con esas intenciones es vulnerar, desde adentro, la autonomía institucional. Y se destaca la necesidad de implementar el servicio civil de carrera electoral a fin de profesionalizar a los trabajadores de los organismos electorales y aprovechar mejor su experiencia. Se considera importante el diseño y aplicación de un Plan de Desarrollo Institucional Estratégico que empate adecuadamente con las actividades derivadas del Código Electoral y con los programas anuales de las Comisiones Permanentes.

41

5. Las relaciones con los medios de comunicación y la sociedad: construcción de confianza y credibilidad.

Este tema fue abordado a partir del planteamiento de preguntas como las siguientes:

- ♦ ¿Por qué son importantes los medios de comunicación?
- ♦ ¿Cómo debe ser la relación de los consejeros electorales con los medios de comunicación?
- ♦ ¿Cómo nos vinculamos con la sociedad?
- ♦ ¿Qué imagen tienen los ciudadanos de la función que desempeñamos?
- ♦ Además de la educación cívica, ¿qué otras acciones podemos emprender para comunicarnos con los ciudadanos?

Si bien es cierto que la credibilidad y la confianza ciudadana respecto de los órganos electorales se relacionan con el profesionalismo, la independencia, la certeza y la objetividad con que se conducen los procesos electorales; y gran parte de esta información la obtienen los ciudadanos a través de los medios masivos de comunicación; ya sea por medio de reportes periodísticos, entrevistas en televisión o en radio o por medio de las columnas periodísticas de analistas políticos que son creíbles frente a la percepción de los ciudadanos lectores. Por lo tanto, las unidades de información y comunicación social son muy importantes en los organismos electorales; debiendo ser permanentes para el manejo de la imagen institucional y las relaciones públicas. Y en consecuen-

cia, la relación de los consejeros electorales ha de ser de respeto y de cordialidad con los medios de comunicación; pues en gran medida, de ello depende el tipo de comunicación que podamos tener con la ciudadanía. Así, los medios de comunicación ayudan a comunicarnos con la ciudadanía; pero también, cuando se tuercen los datos, intencionadamente o no, y las informaciones publicadas son incorrectas, tendremos que precisar nuestras convicciones y aclarar las dudas en torno al tema tratado.





la autonomía de los órganos electorales en el desarrollo de la democracia en México¹

Jesús Cantú Escalante*



1. Confianzas y desconfianzas.

Confianzas en el conjunto es lo primero, es la clave y es lo que debe predominar; pero hay que reconocer, en segundo lugar, que la suma y resta de confianzas y de desconfianzas es lo que le da grado al nivel de credibilidad y eficacia del Órgano Electoral y por lo mismo es fundamental un tercer punto, armonizar su funcionamiento y lograr esa tarea en conjunto. Una cuarta característica que me parece fundamental es buscar las formas organizativas adecuadas para ponerlas en práctica, y aquí a qué me refiero: las leyes electorales han sido muy afortunadas en su diseño para lograr incorporar la participación ciudadana. Esto es, primero, a través de un Consejo General en los distintos niveles de Consejos y esto lo quiero recalcar porque me parece fundamental y es uno de los temas en donde más se discute y en donde muchos creen que ha llegado el momento de hacer una revisión.

43

También creo que es fundamental el hecho de que las Mesas Directivas de Casilla estén en manos de ciudadanos y que sean ciudadanos distintos de una elección a otra. Y ¿Por qué creo que es fundamental?, creo que es fundamental más allá de las razones estrictamente de confianza electoral que no abundaré en esas, porque muchos piensan que es la única razón, pero hay dos razones más: una primera, porque esto es lo que le da propiamente sentido, a la más amplia ciudadanización. En el ámbito federal, en el 2003, se incorporaron más de medio millón de ciudadanos que tuvieron en sus manos el control de las Casillas y por lo tanto el control del Proceso Electoral y en cada uno de los ámbitos estatales, son miles de ciudadanos los que tienen el control del proceso el día de la Jornada Electoral; lo cual es parte fundamental de esta democracia de la que hablamos.

¹ Versión estenográfica de la ponencia presentada en el marco del 4º. Encuentro Nacional de Consejeros Electorales, celebrado en Morelia, Mich., los días 12, 13 y 14 de abril de 2005, organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

* Ex-consejero del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).

La segunda, igualmente importante, es la promoción de construcción de ciudadanía que hacemos en el proceso de selección, capacitación e integración

iones



de Mesas Directivas de Casilla, es inigualable, porque no tiene par en otro momento de los Institutos Electorales y porque no tiene par en ningún otro ámbito de la vida nacional; es decir, más allá de todo el costo, el esfuerzo y todas las energías que se gastan en este proceso de capacitación, ésta es una de las mejores inversiones para nuestra incipiente democracia; quitemos esa idea de que estamos gastando mucho en capacitación: estamos invirtiendo en la construcción de ciudadanía y participación de ciudadanos como forma de control en el proceso de la toma de decisiones y esto no debe ser únicamente en el ámbito electoral, se tiene que ampliar a otros ámbitos de la vida política nacional, a otros ámbitos de la vida comunitaria.

2. El gobierno de la institución electoral.

El órgano de gobierno de un instituto electoral es una instancia *ciudadanizada, autónoma y colegiada*; sin embargo quiero ser muy enfático porque también me parece importante, este órgano debe tener poder de: iniciativa, decisión, ejecución y control. Estas cuatro características son fundamentales; es decir el órgano debe poder proponer, decidir y delegar la ejecución de tareas y acuerdos en los ámbitos ejecutivos, y, desde luego, debe poder controlar, y ¿por qué hago énfasis en esto?, porque lamentablemente hay legislaciones estatales que limitan gran parte de la actuación esencial de estos órganos colegiados, particularmente, en algunos casos por la vía de que es el Secretario Ejecutivo, Director o Coordinador del organismo electoral -porque tiene muchas denominaciones-, el que tiene más atribuciones; es, inclusive, el que propone a quienes pueden ser Consejeros, Directores y Empleados; es decir, esta lógica de Consejero pone Consejero y de una ciudadanización en cascada de alguna manera se rompe, en algunas entidades, cuando es el área ejecutiva –o uno de los cargos ejecutivos- quien tiene la posibilidad de hacer estas propuestas. Y en este sentido quiero compartir tres casos particulares, lamentablemente en donde creo que se presenta algún tipo de regresión en este sentido:

- Fue conocido, y superado en su momento, aquel intento por parte del Gobernador y el Congreso de Yucatán, cuando quisieron integrar aquel órgano electoral “a modo”, que, finalmente, fue revertido por una decisión del Tribunal y que, afortunadamente, tuvo un desenlace feliz, pero lo que quiero señalar es que ahí están los riesgos de quiénes quieren una integración y quiénes quieren una regresión. Todavía hay quien quiere, desde los altos mandos



de gobierno, seguir controlando a las instituciones electorales y la ciudadanización de los mismos, les estorba.

- El caso en estos momentos, porque ya se ha ventilado en los medios de comunicación y creo que no con la profusión que debiera, es el de Veracruz con el intento de desaparecer la permanencia del Órgano Colegiado del Consejo –sólo se llamaría a los Consejeros en momentos de elección- y dejarlo fuera de los tiempos no electorales, en donde las decisiones fundamentales para el funcionamiento del organismo electoral quedarían en manos de los Representantes de los Partidos Políticos. Eso tendría muchísimas implicaciones y una regresión absoluta. Una primera sería desconocer toda la labor de educación cívica y tareas que hacemos todos los Órganos Electorales fuera del momento electoral; pero en un segundo lugar, eso permitiría que los Representantes de los Partidos Políticos, primero, en muchos de los casos serían juez y parte, porque iban a continuar desarrollando las tareas de otorgamiento de prerrogativas, de fiscalización y de una serie de tareas, donde son ellos mismos quienes estarían a cargo de supervisarlas y, a la vez, siendo sus beneficiarios, y segundo, implicaría desde luego el hecho de que se pudieran sentar bases para que ya no gozaran de la misma credibilidad ante la sociedad para la realización del Proceso Electoral.
- El de Veracruz es uno de los casos más preocupantes, pero hay otro que lamentablemente ha sido muy poco conocido y es el caso de Chiapas, ahí pretenden la creación de lo que denominan la Contraloría de la Legalidad Electoral y ésta asumiría todas las funciones de fiscalización, de atención de quejas, etc., que son facultades de los organismos electorales. Es decir, el Instituto Electoral de Chiapas sería una caja pagadora que entregaría el dinero a los Partidos Políticos, pero no aplicaría la supervisión sobre el uso de esos recursos. Es cierto, hay un problema real, un problema que hay que atender, como lo es la tarea de fiscalización, pero no se va a resolver mejor creando otra institución y quitando atribuciones a los Órganos Electorales en materia de fiscalización. En todo caso lo que debe hacerse es ampliar las facultades de los organismos electorales para que puedan cumplir más eficazmente esa responsabilidad y hay que establecer otros candados en la autonomía para que, efectivamente, se logre que los Partidos Políticos no puedan presionar y “cobrarse cuentas” con los Institutos



Electorales que cumplen a cabalidad sus tareas de fiscalización.

Lamentablemente esta reforma, inclusive, se promociona a nivel nacional, por el gobierno estatal, como que si fuera de vanguardia; es parte de las reformas que promocionó el gobernador diciendo que: *se colocaba a la vanguardia en legislación electoral a nivel nacional*.

Un punto que es fundamental y que hay que tocarlo en todas sus letras tiene que ver con los procedimientos, formas de propuestas y designación de los integrantes de los órganos de gobierno de los institutos electorales –en especial los Consejeros Electorales. Esto, lamentablemente, ha sido uno de los puntos críticos y ha hecho también crisis en muchas de las entidades del país e inclusive a nivel federal. En este sentido hay que buscar fórmulas mucho más creativas que obviamente es muy difícil establecer en una sola ruta o receta que además sea aplicable en todas partes; pero definitivamente creo que el hecho de que todo se dé en un solo órgano de gobierno o en un Congreso o en una Cámara -que sean los grupos Parlamentarios de los Partidos Políticos los que hagan las propuestas y ellos mismos los que decidan- y con procedimientos no claros ni transparentes ni públicos para la sociedad, no es la mejor forma. Es fundamental que haya participación de los poderes, pero que haya transparencia y claridad.

Otro punto fundamental es decidir quiénes son los que van a integrar estos Órganos Electorales –o sea, con quiénes se van a integrar-; para ello, debemos trabajar más en este sentido, porque debe ser gente conocedora del tema, que sea gente que haya mostrado vocación de servicio. Soy un convencido de que la renovación de estos órganos colegiados debe de ser en forma escalonada, porque eso permite hacer coincidir experiencia con una visión fresca. Lo importante es mantener la ciudadanización en la medida en que pueden ser y son muchos los que van llegando a los órganos electorales y que no sean siempre los mismos; y, en este sentido, deben estar establecidas dos prohibiciones, primero, la de reelección de cualquiera de los integrantes de los órganos de gobierno, porque eso sería cerrarle el paso a que llegue gente fresca; y, segundo, si estamos requiriendo que sea una visión fresca la que llegue, creo que tampoco es conveniente que de la propia estructura profesional del mismo órgano, lleguen al Consejo; es decir, si se establece el escalonamiento, hay que incluir estas dos condiciones claramente para que se logre, precisamente, la plena ciudadanización de estos órganos colegiados y su renovación sin afectar la continuidad de programas y estrategias.



3. Las remuneraciones.

Otro aspecto fundamental es la remuneración de quienes integran estos Órganos Electorales que debe de estar establecida en la Ley, no necesariamente con pesos y centavos pero sí con un equiparable, diciendo claramente desde la ley cuál es la remuneración que debe corresponder a las responsabilidades de quienes participan en un órgano de dirección de un órgano electoral, donde son altos los costos, el desgaste y las presiones que se reciben, sobre todo, cuanto se tiene tiempo completo y no sólo eso, sino tiempo exclusivo, sólo dedicados a laborar en el órgano electoral, como en muchos casos la ley electoral señala, porque esto implica abandonar todas las otras actividades profesionales y dedicarse a esto y una vez que se concluye, obviamente hay que reintegrarse a una vida civil después de un tiempo que no se estuvo participando y eso no es un asunto fácil. Son, por tanto, posiciones que deben estar bien pagadas, pero esto debe estar establecido en la ley como remuneración, con prestaciones, con todo tipo de percepciones para evitar golpeteo en los medios y abusos que, en algunos casos, se han dado. Lo ideal es que esto quede perfectamente establecido en la ley.

4. La transparencia.

47

Otra cosa importante es que todas las sesiones de los órganos sean públicas. Lo público de los órganos colegiados es uno de los elementos fundamentales para lograr esta confianza y credibilidad en los mismos. Aquí quiero incorporar dos aspectos claves, primero: ¿cómo rendir cuentas y ante quién? En todos los ámbitos tanto estatal como federal, no está establecido ni siquiera que se deba rendir un informe ni ante el Congreso, ni a la ciudadanía, ni ante el propio Consejo en donde participan los Partidos Políticos y donde existe de alguna manera la publicidad de las sesiones. Creo que este es otro eslabón donde se puede avanzar muchísimo y creo que tampoco es necesario que haya reformas legales. Lo coloco como un tema en el cual se puede caminar por la vía de reglamentos y de compromisos de las instancias de los Órganos Electorales a fin de establecer mecanismos de rendición de cuentas frente a la ciudadanía, más si reconocemos y nos damos cuenta que la rendición de cuentas es una de las columnas de la democracia. Si los Órganos Electorales damos un paso al frente en ese sentido, nos colocamos a la vanguardia y si nos decidimos a dar cuentas, no sólo de la parte económica, que de eso se rinde ante los Congresos y ante las Cámaras, sino de nuestra labor sustantiva, que es la organización de elecciones, que es la de educación

Jones



cívica y la de promoción de construcción de ciudadanía, estaremos, verdaderamente, contribuyendo no sólo a difundir sino a poner en práctica los principios básicos que hacen a una democracia. Por lo que rendir cuentas no es simple y sencillamente informar, es sujetarse al juicio de quien, y ante el cual, se está rindiendo cuentas; pero también es establecer compromisos para mejorar las gestiones institucionales.

5. La autonomía.

El elemento central de la autonomía de las instituciones electorales está constituida por la *autonomía de gestión, la funcional, la presupuestaria y el servicio profesional* de carrera; no ahondaré mucho en la funcional, porque creo que en eso todos estamos de acuerdo y aunque de manera desigual, todos hemos avanzado bien en ese sentido. Primero, la *autonomía* no es autarquía; segundo, la autonomía implica que las decisiones que toman los órganos de dirección, los tomen estrictamente dentro de sus ámbitos de competencia y sin atender ni recomendaciones, ni presiones de cualquiera de los actores políticos -y ahí no estaría hablando, ni de gobierno, ni de Congresos, ni de los Partidos Políticos-; es decir, quienes toman las decisiones, quienes integran el órgano lo hacen absolutamente a conciencia y apegados a la legalidad; y sólo con el compromiso frente a la ciudadanía de velar por su voto y el desarrollo democrático del país. Porque más allá de las percepciones, más allá de las críticas que se hagan a nivel nacional o en algunos Estados, sobre la autonomía de los Órganos Electorales el concepto está claro.

Pero sí hay que ahondar en el otro ámbito, en el económico, que sí quiero que quede establecido, que es la lucha que tienen que dar los Órganos Electorales frente a sus autoridades para lograr que se establezca una fórmula para la determinación de su presupuesto –en tiempos electorales y no electorales-, independientemente de la voluntad de los diputados; ¿por qué? Porque es la mejor manera de hacer valer la autonomía –la decisión sobre la fijación del presupuesto regularmente pasa por una discusión y aprobación de los órganos colegiados de los institutos electorales y no son producto de un capricho sino de una estrategia de Estado para alentar la cultura democrática. Ahí está uno de los principales problemas a superar, éste es todavía peor que en algunos de los Estados donde no sólo se tienen que pelear con el Congreso, sino que primero tienen que pelear con el Ejecutivo que, si bien no es así en todas las entidades, en algunas es el primero que quiere: recortar, quitar, poner, hacer lo que quiera; y, en una segunda instancia, con el Congreso.



Es fundamental que aquí se establezca una fórmula, y en el caso electoral es más fácil; la referencia clara es el número de ciudadanos en el Padrón Electoral. Se puede establecer un multiplicador para año electoral y otro para el no electoral; con esto se ganarían dos cosas fundamentales, una primera: se lograría que los órganos electorales fueran más eficientes, porque ya todos sabrían que cuentan con un presupuesto y su monto; y no estaríamos sujetos a la duda de cuánto me darán el próximo año. Pensar en, justamente, establecer criterios para estos ciclos ayudará a elevar la eficiencia de los Órganos Electorales; y uno segundo, es que se eliminaría un elemento de presión de cobro de cuentas de los Partidos Políticos –mediante sus representantes en el Congreso, que no actúan como representantes populares sino de manera facciosa-, muy particularmente después que se realizan las tareas de fiscalización.

Un elemento fundamental para salvaguardar la *autonomía* de los Órganos es construir este parámetro, va a ser un solo pleito, una sola discusión, pero sólo una vez y es fundamental que este parámetro y esta fórmula sea la adecuada. Así se fortalecerá y se construirá la auténtica autonomía de los Órganos Electorales.

49

6. El servicio profesional de carrera.

Otro elemento importante, otra característica lógica de los Órganos autónomos y eficaces es la existencia de un *servicio profesional de carrera*. Para ello, es fundamental que cuenten con un cuerpo de funcionarios ejecutivos que puedan hacer su proyecto de vida dentro de la propia institución, que tengan certeza bajo reglas muy claras de ingreso, evaluación, desarrollo,



iones



término y sanción; es fundamental que la normatividad que regule a este *servicio profesional de carrera*, obviamente no sea una normatividad que conduzca a la construcción de privilegios y burocratización de los órganos, sino que promueva la eficacia, la eficiencia y la lealtad a los principios rectores de las instituciones. Se trata de construir un servicio profesional de carrera que reconozca el mérito y el esfuerzo, que vaya perfeccionando todos sus procedimientos y que logre, desde luego, ejecutar a plenitud todas las decisiones del órgano de dirección autónomo.

7. Las conclusiones.

Con estas reflexiones muy concretas y con tres conclusiones termino:

- Existen riesgos muy claros -ya señalaba con ejemplos concretos pero creo que hay muchos otros-, donde lo que se pretende es justamente una regresión en la autonomía y ciudadanización de los Órganos Electorales; creo, en este sentido, que también -hay que señalarlo con toda claridad-, el grado de desarrollo y autonomía de los Órganos Electorales es muy heterogéneo a lo largo y ancho del país y aquí no nos queda más que tratar de construir y acercarnos lo más posible para tomar e imitar, en lo posible, lo mejor de cada uno.
- Estoy convencido de que los Órganos Electorales deben fortalecer el área de promoción de construcción de nueva ciudadanía, ya que es el elemento crítico para consolidar la presencia de Órganos autónomos, y, desde luego, de los Órganos Electorales. Finalmente, porque muchos lo piensan así -dijeron y señalaron que la ciudadanización de los órganos electorales era simplemente para una transición, para un momento, pero que con el paso del tiempo llegarían éstos a ser eficaces administrativamente y con un servicio profesional honesto y comprometido- hay que reivindicar, frente al poder, la ciudadanización de las instituciones públicas.
- No, al contrario de esas formas de pensar, la ciudadanización de los órganos autónomos llegó para quedarse; es una exigencia de la sociedad, es una necesidad si queremos construir una democracia que esté a la vanguardia en el mundo. La ciudadanización, al contrario de lo que algunos políticos piensan, se tiene que extender hacia otras áreas y ámbitos de la vida pública municipal, estatal y federal, que aunque estoy cierto que muchos apostaron a que la



ciudadanización iba a fallar en lo electoral, el compromiso ha sido, no sólo demostrar que se puede realizar sino que es tan eficiente y eficaz, tan sano para la confianza y la transparencia, que debe extenderse a otros ámbitos de la vida pública.

51



estado y desafíos

de la ciudadanización de los órganos electorales locales

Ernesto Hernández Norzagaray*

1. Presentación.

Este trabajo es parte de los resultados de una investigación en curso sobre el estado que guarda la ciudadanización en los órganos electorales locales de México¹. Animamos a este proyecto los cambios que hemos visto en los años recientes en su integración y operación, pero también los potenciales, retrocesos y desafíos que estos tienen de frente al proceso de cambio que se está viviendo en el país. Partimos de dos premisas básicas que nos enseña la teoría neoinstitucionalista cuando sostiene que las instituciones sólo cambian en forma incremental, es decir poco a poco, sobre plazos relativamente largos y donde las normas y reglas institucionales influyen de manera determinante sobre el comportamiento individual².

En México, este vértice se encuentra en el proceso reformista que se dio en 1978 y concluyó con las reformas constitucionales y reglamentarias de 1996, como también en la rutinización de procesos electorales competitivos y exentos de conflictos poselectorales. La transformación que sufren los organismos electorales desde finales de los años ochenta tiene como principal distintivo la separación del gobierno en la organización y calificación de los comicios, constituyó la entrada para que por primera vez en nuestra historia hubiera la llamada “incertidumbre democrática” de manera que no se supiera de antemano qué partido resultaría vencedor.

Esto es posible gracias a las reformas constitucionales pero sobre todo a la ciudadanización de los organismos electorales que fueron y son la garantía de que cada día tengamos resultados y gobernantes con legitimidad democrática. No obstante, a más de quince años de iniciado el proceso de ciudadanización cabría la formulación de varias interrogantes con relación al estado de las instituciones electorales y, eventualmente, cuáles podrían ser las reformas factibles de ser incorporadas en las legislaciones electorales, de

* Profesor-Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Consejero Propietario del Consejo Local del Instituto Federal Electoral y Consejero Propietario del Consejo Estatal Electoral en Sinaloa.

¹ Este proyecto de investigación se lleva a cabo en el ambiente del Centro de investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el apoyo del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa.

² James G. March y Johan P. Olsen. El Redescubrimiento de las Instituciones. La Base Organizativa de la Política. FCE. México. 1997.



manera que se fortalezcan y, de la misma manera, se detengan los intentos por reducir el espacio de acción de los ciudadanos. Y esta tesis la sostengo bajo el entendido de que las democracias consolidadas, entre más lo están, menos requieren de un aparato sofisticado y una burocratización de la organización electoral; sin embargo, en un país como el nuestro, donde prevalecen diseños que de la misma manera que le conceden ventajas adicionales al partido más votado, persisten vacíos legales que favorecen la inequidad; y como un acto de justicia democrática es necesario establecer equilibrios ciudadanos.

Luego, entonces, en las páginas siguientes vamos a exponer algunos de los elementos que definen el estado que guarda la ciudadanización. En este primer documento expondremos algunos datos preliminares que esperamos en el mediano plazo dar forma de libro para el conocimiento de todos los ciudadanos; estén éstos o no en los órganos electorales, pero muestren interés en la cosa pública. A tal efecto los hemos agrupado en tres bloques de información: *la integración de los órganos electorales, los procedimientos de selección de los consejeros ciudadanos y los desafíos de la ciudadanización en los órganos electorales.*

2. La integración del órgano electoral.

53

En una muestra preliminar de los treinta y dos órganos electorales encontramos que en su totalidad está en práctica la representación ciudadana. Sin embargo, hay una variedad de formatos tanto por el número de sus miembros como por las procedencias de cada uno de ellos. Así, tenemos que la mayoría de los estados tienen como figura jurídica la de *Consejero Ciudadano* aunque también encontramos en el Distrito Federal y en estados como Michoacán, y Morelos la de *Consejero Electoral*, que de acuerdo a la literatura especializada tiene atributos más específicos con respecto al desempeño de sus funciones; cosa que en algunas ocasiones no ocurre con los consejeros ciudadanos, especialmente en los consejos distritales o municipales.

También la información a la mano nos muestra que si bien el número de consejeros ciudadanos oscila entre los siete y nueve, existen casos donde el número es menor como vienen siendo los casos de Guanajuato, Hidalgo y Morelos donde el órgano electoral está integrado por cinco miembros propietarios, aunque en los casos de Baja California Sur, Morelos y Guanajuato existen al menos dos consejeros ciudadanos supernumerarios que serán

iones



designados “exclusivamente para que suplan a los Consejeros Ciudadanos Numerarios en sus inasistencias a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo³”.

No menos importante es la representación del Poder Legislativo en el órgano electoral, lo que varía de estado a estado. Así, estados como el de Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca o Sinaloa, contemplan su presencia por el mismo número de partidos con presencia en las cámaras locales, no sucediendo lo mismo en otros estados donde se prescinde de este tipo de representación política. Son los casos de Baja California, Distrito Federal, Chihuahua, Colima, Guerrero, Nayarit, Estado de México y Querétaro.

La representación del Poder Ejecutivo tiende a extinguirse, sin embargo, en el estado de Guanajuato sigue teniendo un lugar en el Instituto. Asimismo, como parte de la representación en este órgano ciudadanizado en todos los estados existe la representación de los partidos políticos, tanto federales como locales. Hay, incluso, estados donde se contempla como parte del consejo o instituto la presencia de un Secretario General, el Vocal Estatal del Registro Federal Electoral y el Director General del Instituto.

54

En suma, en la integración de los consejos e institutos electorales, encontramos distintos diseños constitucionales y reglamentarios, que siguiendo la línea incremental sostenida por March y Olsen, podríamos concluir que en este renglón existen diversos dispositivos de ley que permiten una mayor o menor autonomía del órgano electoral. Tanto en lo que se refiere a la toma de decisiones, como a los equilibrios políticos que rodean el quehacer de este tipo de organismos ciudadanizados. La fotografía estadística que hemos mostrado nos presenta un desarrollo de varias velocidades en la integración de los órganos electorales que son una muestra de la naturaleza y el estado en que se encuentra la democratización de nuestras instituciones electorales.

3. Los procedimientos de selección de los consejeros.

El procedimiento de selección del Consejero Presidente, como de los consejeros ciudadanos o consejeros electorales, no tiene un único formato que lo homologue. En el caso del Presidente en ningún estado interviene directamente el Ejecutivo, tanto a iniciativa propia como para proponer candidato, lo mismo ocurre con los partidos que se limitan a los consensos de sus representantes en la cámara legislativa. No obstante, existen dos

3 Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California.



mecanismos que regularmente se utilizan en ambos casos y están mediados por una convocatoria pública emitida por el Congreso del Estado destinada a los ciudadanos interesados en ocupar este cargo en el órgano electoral; uno, proveniente de esa misma convocatoria que una vez teniendo los nombres de los aspirantes resuelve la nominación –en el caso de Sinaloa, las fracciones parlamentarias en la última designación solicitaron que el aspirante manifestara por escrito su interés por la Presidencia o por detentar uno de los ocho cargos de consejeros ciudadanos, en el entendido de que si lo hacía por el primero no podría competir por alguno de los otros cargos de representación ciudadana-, este procedimiento como lo han dicho observadores políticos tiene sus debilidades ya que se aprecia una intervención de los partidos a través de sus militantes en la cámara legislativa y, en esa lógica, se impone un sistema de cuotas que, al menos ante la opinión pública, da la impresión de que los consejeros ciudadanos y electorales adquieren compromisos políticos con el sistema de partidos local.

El otro mecanismo que despoja en parte esa percepción es la de que una vez designados los consejeros ciudadanos y electorales, son éstos en el uso de sus facultades legales, los que seleccionan a quien detentará el cargo de Presidente del Consejo o Instituto.

55

En el primer caso se encuentran estados como los de Baja California Sur, México, Michoacán, Morelos, Nayarit o Oaxaca, en tanto en Baja California, Colima Guanajuato, Jalisco o Querétaro, se inclinan por que sea resultado de una votación con mayoría calificada entre los consejeros ciudadanos y electorales.

Al margen de estas disposiciones legales, existen otras formas de designar a los Presidentes, que tienen distintos matices y son dignas de nuestra atención; por ejemplo en Chihuahua, la designación es a propuesta de las fracciones parlamentarias; o la de Sinaloa donde es “a propuesta de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad, instituciones académicas y organismos intermedios recono-



iones



cidos por la ley”; la de Morelos donde las propuestas son motivo de análisis y dictamen a través de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política del Congreso del Estado y, por último, se encuentra la ley tamaulipeca donde los consejeros electorales propondrán una terna, de entre ellos, para que el Congreso elija al Presidente. El Presidente del Consejo Estatal Electoral, lo será también de la Junta Estatal Electoral.

En lo que se refiere a la designación de los Presidentes y Consejeros ciudadanos electorales en los Consejos Distritales y Municipales también encontramos diferencias en los estados. Están los estados donde el Presidente del Consejo Estatal Electoral o el Instituto Estatal Electoral proponen a los presidentes de los órganos electorales donde se realiza el trabajo operativo de la elección. Son los casos de las Bajas Californias, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit y Tabasco; en tanto es en Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala donde los consejeros ciudadanos y electorales son los que designan a sus similares en los consejos Distritales y Municipales. También es significativo el dato de que entre las prerrogativas que detenta el Presidente está la de proponer también a los candidatos a consejeros distritales y municipales, como lo indica una muestra de trece estados; nueve de ellos no contemplan esta disposición.

56

En definitiva, los procedimientos de selección de quienes integran los organismos electorales son igualmente variados, en ellos se observa una clara inclinación en hacer prevalecer una cierta centralidad en la figura del Presidente, cuando las tendencias y pulsaciones se orientan hacia fórmulas más horizontales en la toma de decisiones en un aspecto tan sensible como es el político; tan sujeto a la percepción de los medios de comunicación y a la hipersensibilidad de los actores políticos.

4. Los desafíos.

Los desafíos de la ciudadanización en los organismos electorales, hasta donde nos permite ver la investigación en curso, son de tres tipos:

- *Primero.* Están en fortalecer los organismos electorales mediante una mayor institucionalización de los mecanismos de selección de quienes aspiran a desempeñarse como funcionarios e, incluso, los que se preparan para hacer de ello un servicio civil de carrera. Esto pasa por evitar la discrecionalidad de los organismos políticos y establecer reglamentos donde se establezcan



con absoluta claridad los mecanismos de acceso, permanencia y relevo del cargo de representante ciudadano. Así mismo, orientar esfuerzos a la eliminación de aquellas áreas oscuras que en ocasiones llegan a poner entredicho la independencia del órgano electoral y el desempeño de los consejeros electorales.

- **Segundo.** Profesionalizar los órganos electorales mediante una intensa capacitación y colaboración interinstitucional de manera que se puedan intercambiar experiencias y fortalecimiento de las instituciones electorales del país. Son muchas las singularidades de cada uno de los estados (como también las similitudes), que tienen un diseño que fue pensado para establecer planos de acción institucional pero en su propio establecimiento ha adoptado formas diversas de adecuación. Me parece que los órganos electorales de los estados en varios sentidos han favorecido el cambio institucional como fue en su momento la credencial de elector del Estado de Baja California, las regulaciones de los debates entre candidatos a puestos de elección popular o la equidad de género en su integración; lo que ha constituido una contribución a fortalecer estas tendencias modernizadoras que dan una mayor legitimidad a los ejercicios comiciales. No obstante, esta heterogeneidad deriva en las diferencias de derechos entre los mexicanos. La ciudadanización debe influir para que el país camine hacia un régimen jurídico que garantice homogeneidad en términos de independencia y autonomía entre los órganos electorales locales.
- **Tercero.** Luego, entonces, el proceso de ciudadanización de los organismos electorales está en espera de una nueva generación de reformas que amplíen las competencias para responder a muchos de los reclamos que tienen amplios segmentos de la población. En las precampañas electorales, las campañas negativas, el financiamiento, el debate público o en los medios de comunicación, existen muchos de los pasivos que deben ser superados, como ya viene sucediendo en estados donde se han dispuesto mecanismos regulatorios para propiciar elecciones cada día con mayor credibilidad y gobernantes con una mayor legitimidad democrática. Y de igual forma, ya es el momento de que empecemos a reflexionar sobre los mecanismos de designación de los consejeros electorales y los consejeros presidentes. Pues la atribución que le dan prácticamente todas las legislaciones del país a los congresos de los estados, enfatiza una elección mediante mecanismos de participación ciudadana que evite la discrecionalidad frecuente que encontramos en muchos estados. Incluso, avanzar, como ya ocurre en varios estados, donde el Consejero presidente es designado no por el Congreso Local, sino por la voluntad de los propios consejeros.



desarrollo de la autonomía de los órganos electorales en México¹

W. Humberto Vázquez Rubio*

Consideraciones Generales

Referirnos a la Autonomía de los Órganos Electorales es hablar de un tema central e imprescindible, que debe formar parte de la agenda de los encuentros nacionales, dada su naturaleza y función en la vida democrática y representativa de nuestro país; que se ejerce al amparo de la ley como expresión de la voluntad popular y dentro de un marco normativo, a través de todo un cuerpo electoral, cuya participación se basa en medidas técnico-administrativas y legales, orientadas a organizar y preservar el desarrollo imparcial y objetivo de los procesos electorales en cada una de sus etapas, para garantizar que el voto emitido por los ciudadanos se respete, a fin de lograr la autenticidad de las elecciones.

En este contexto, los órganos electorales han venido adquiriendo mayor fuerza en virtud de la importancia y trascendencia de sus actos, derivados de la alta responsabilidad conferida, como por los propios antecedentes de su origen y evolución, que los convierte en depositarios de la confianza ciudadana y receptores de la opinión de los partidos y agrupaciones políticas, quienes les demandan cabal desempeño y cumplimiento irrestricto en la aplicación de la normativa electoral, relacionada con el ejercicio de sus derechos de participación, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas y libres.

Es por ello, que el estudio y análisis sobre el fenómeno electoral debe ser permanente y sistemático, de aquí que este el 4º. Encuentro Nacional de Consejeros Electorales, sea un foro privilegiado donde podamos discutir y evaluar las propuestas contenidas en los trabajos que los diversos consejeros han presentado, así como expresar libremente nuestros criterios sobre la materia que nos ocupa, principalmente en todos aquellos casos resultantes de la experiencia e investigación, que tengan como propósito contribuir al Fortalecimiento de la Autonomía Electoral, proponiendo nuevas formas y alternativas susceptibles de ser aplicadas en el ámbito interno de cada

¹ Ponencia presentada en el marco del 4º. Encuentro Nacional de Consejeros Electorales, desarrollado los días 12, 13 y 14 de abril de 2005, organizado por el IEM.

* Licenciado en Derecho. Maestro en Administración Pública. Consejero Electoral propietario, integrante del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).



organismo, como en su relación con los demás poderes instituidos, guardando en todo momento su independencia.



59

II.- Institucionalización de la Autonomía Electoral

Los avances y grado de desarrollo de la autonomía electoral, desde las perspectivas social, política y cultural prevaletientes en cada etapa de la vida nacional, han tenido que ver con la continuidad de los procesos electorales. Es este un hecho incontrovertible que históricamente ha venido incidiendo en la formación, conocimiento y perfeccionamiento de las normas reguladoras que forman parte del Derecho Electoral, el cual ha tenido constantes reformas jurídicas, como resultado de las adecuaciones políticas y exigencias de la sociedad.

En la década de los setenta del siglo pasado, se sitúa de manera fundamental la transformación del sistema político electoral en la historia de nuestro país; a partir de entonces, el esquema jurídico-político que norma las instituciones y los procesos político-electorales ha ido evolucionando. Pasando del debate sobre los procedimientos, a la consecución de una nueva legitimidad electoral; así como de la impugnación sistemática, al establecimiento de mecanismos permanentes, donde el consenso ha sido factor primordial entre partidos, gobierno y sociedad civil.



De manera sucinta referiremos algunos de los avances logrados, mismos que han incidido favorablemente en el desarrollo de la institución electoral. Siendo el caso de la reforma al artículo 60 de la Constitución General de la República, efectuada en 1986, donde se propone la institución de un Órgano Jurisdiccional, señalándose que los Colegios Electorales que se integren por las Cámaras de Diputados y Senadores, constituirán la última instancia para calificar las elecciones; con ello se pretende que la función deje de ser sólo actividad político-electoral, para darle alcance jurisdiccional a través de las sentencias que dicte este órgano, cuyo carácter es obligatorio.

En 1990, se instituye el Tribunal Electoral; y en 1993, con una nueva reforma al precitado artículo 60 constitucional, desaparecen los Colegios Electorales y se establece una Sala de Segunda Instancia. Pero es en 1996, cuando se crea el Tribunal Federal Electoral (TRIFE)²; y en este mismo año, como consecuencia de las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), se da la Ciudadanización de los Órganos Electorales.

60

A partir de entonces y mediante la intervención del Poder Legislativo, con base en las propuestas que hacen las propias fracciones parlamentarias, es como se aprueba a los Consejeros Electorales que habrán de formar parte del Consejo General, dando con ello un paso importante respecto de su autonomía; situación que se ha venido reflejando paulatinamente en los Órganos Electorales Locales de nuestro país.

Es así como se alcanza la institucionalización de los Procesos Electorales, se dan sus principios y se establecen sus fines, en donde toda la actividad electoral se ajusta a principios de derecho, para garantizar la democracia política, social y económica, cuyos efectos han trascendido de manera inmediata y directa, en favor de la tranquilidad y la estabilidad social.

De aquí que la reforma electoral en México, deba ser permanente y sistemática, producto del esfuerzo colectivo y constante perfeccionamiento democrático mediante una intensa actividad y participación de la sociedad, de las organizaciones políticas y del gobierno en todos sus órdenes; propiciando así, la conformación y fortalecimiento del esquema de modificaciones estructurales, cuya permanencia y validez estén garantizadas por el marco legal e institucional vigente, lo que permitirá conseguir su propia evolución.

2 El cual se transformaría posteriormente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; con lo cual adquirió mayor autonomía.



Para contribuir al logro de tal fin, uno de los esfuerzos que valdría la pena emprender sería aquel que tienda a vencer la indiferencia sobre los temas del Derecho Electoral, empezando por la formación de profesionistas, mediante el establecimiento y estudio de cátedras específicas, que sean parte de los programas académicos en todas las universidades; como el de impulsar la edición y difusión de obras jurídicas sobre la materia y lograr que se dé la relación interdisciplinaria entre los aspectos políticos con los legales.

Se advierte pues, la necesidad actual de ampliar el conocimiento de las normas electorales, darles más claridad en su redacción y mayor difusión, con la finalidad de facilitar su entendimiento en la colectividad.

III.- Principales Características de la Autonomía Electoral

Por lo anterior, señalaremos que la materia y su término son aplicables al proceso de elección de los representantes populares, a la regulación de mecanismos de participación ciudadana, con todas sus implicaciones. De aquí se desprende, que su campo se vincula por su origen al Derecho Constitucional, ya que se encarga de velar por el respeto al sufragio, de la integración de los Organismos Electorales, el material que se emplea en las elecciones, señala las etapas de los comicios, la calificación de los mismos; así como de los derechos y obligaciones de los partidos políticos y de los ciudadanos, entre otros puntos fundamentales.

61

Existe coincidencia entre los estudiosos de la materia, al señalar que la autonomía electoral puede entenderse en dos ramas; la primera, que se refiere a su ámbito procesal y que se traduce en la autonomía de su acción; la segunda, que tiene que ver con su ámbito y diseño constitucional y que es la facultad de autogobernarse. Aquí cabe destacar que cada órgano tiene delimitado su concepto y alcance de la autonomía, ya que éstos varían dependiendo del órgano local que sea materia de estudio, debido a que en nuestro país no existe una homologación sobre los criterios y conformación de los mismos.

No obstante lo señalado anteriormente, podemos destacar los siguientes elementos como rasgos fundamentales de dicha autonomía, que son:

- 1.- *Autonomía política*; que se refiere a la facultad que tiene el órgano electoral de ejercer su función en forma independiente sin sujeción a ninguno de

iones

los tres poderes clásicos u otro órgano, y que la normatividad le otorgue carácter de máxima autoridad electoral en la materia. Por lo cual, es necesario considerar la forma de designación de los consejeros electorales; participación del ejecutivo en el proceso de designación de éstos; la mención sobre el carácter de autoridad máxima en la materia, carácter de organismo público autónomo, siendo este último supuesto de trascendencia sobre todo si se encuentra su fundamento en los textos constitucionales. Reunidos estos factores, estamos en presencia de un órgano con autonomía total.

- 2.- *Autonomía financiera*; es aquella que viene a garantizar la independencia económica del órgano; sería total, cuando el órgano electoral proyecta, aprueba y ejerce su presupuesto, y será plena, cuando el órgano electoral no sólo aprueba su presupuesto y las formas de distribuir los recursos, sino que exista un porcentaje presupuestal a nivel constitucional para las autoridades electorales.
- 3.- *Autonomía jurídica*; implica la capacidad del órgano para autodeterminarse reglamentariamente. Ésta se tiene plenamente cuando encontramos las siguientes atribuciones: la facultad de expedir su reglamentación interna, la de iniciar leyes en el ámbito de su competencia, y la de erigirse en órgano de control de la legalidad de los actos de los organismos electorales inferiores.
- 4.- *Autonomía administrativa*; que consiste en la facultad del órgano electoral para establecer procedimientos y parámetros de su organización interna, así como de los organismos electorales que están a su cargo. Es total cuando tiene amplias facultades de administración de los recursos materiales y humanos del propio órgano electoral.

IV.- Retos y Perspectivas de la Autonomía Electoral

El desarrollo democrático de México, exige que los órganos electorales locales sean sujetos de una permanente actualización y adecuación, para lograr su evolución y alcanzar mayor fortalecimiento de la autonomía institucional. Por ello es conveniente conocer en estos encuentros, el grado de autonomía con que cuentan actualmente los órganos electorales de las entidades federativas, y encontrar dentro de un análisis riguroso los mecanismos legales que permitan en aquellos casos, dotarlos de esta facultad constitucional.

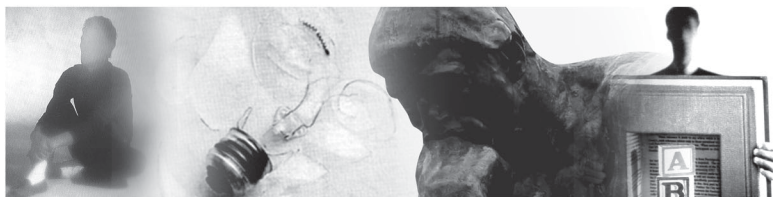
Asimismo, es importante revisar y proponer adecuaciones en todo lo que tiene que ver con el estatuto jurídico de los consejeros electorales; es decir, la



forma de su nombramiento, la elección del presidente de entre sus pares, la remuneración en relación con el principio de exclusividad a su cargo, la idoneidad para el ejercicio del mismo y el régimen de responsabilidades.

Finalmente, debemos considerar la inclusión de otros factores que contribuyan al fortalecimiento de la autonomía electoral, tales como la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño, este último como elemento fundamental en la concepción y establecimiento del sistema de servicio profesional electoral, ya que sólo así podremos ampliar el concepto de dicha autonomía local, la que tendrá siempre como objeto y fin último el de responder de manera eficaz y eficiente a la confianza ciudadana, al ser garantes de uno de los derechos fundamentales, que es el del sufragio.

La reforma electoral en las entidades federativas debe responder al sentido de pluralidad política que vive el estado mexicano, a las exigencias sociales tan sentidas que en este campo se presentan actualmente, a partir del ejercicio de su propia autonomía, como elemento sustantivo del sistema federal nacional.



F. G. Marín



Gildardo Durán Sánchez



Ignacio Hurtado Gómez



Jorge Vázquez Piñon



ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

... **análisis político y**
construcción de ciudadanía

las formas de representación política (parte III)

F. G. Marín*

“La POLÍTICA es el ‘hacer’ del hombre que, más que ningún otro, afecta e involucra a todos... Pero el hacer del hombre está precedido de un discurso (sobre el hacer). El discurrir del *homo loquax* precede a la acción del hombre operante.”
Giovanni Sartori

1. Preámbulo.

Así pues, de conformidad con el espectro político de las sociedades contemporáneas, es posible reconocer tres dimensiones de la representación política del Estado, a saber: por un lado, la >>representación ejecutiva<< que tiene como función sustantiva la administración del gobierno; por otro lado, la >>representación parlamentaria<< cuya responsabilidad comprende tres ámbitos, esto es, la definición legislativa, la deliberación de los intereses públicos y el seguimiento de la administración gubernamental; y en última instancia, la >>representación emergente<< la cual, ante la evidente crisis de representación política que padecen las anteriores, asumen el rol de gestores de la sociedad civil ante los aparatos estatales –tal es el caso de las organizaciones civiles, las asociaciones sociales y las agrupaciones gremiales, particularmente de las fracciones opositoras, entre otras-. Cada una de estas dimensiones de representación política tiene sus propias formas particulares de legitimar, asumir, desempeñar, operar y delimitar la representación pública que ejercen ante la sociedad.

2. La representación en los sistemas parlamentarios.

En los sistemas parlamentarios la legitimidad de la representación ejecutiva se consigue mediante la mayoría de escaños alcanzados en el Parlamento. El gobierno es asumido por el partido, o alianza de partidos, con mayoría de representantes en este cuerpo de deliberación política, elegidos mediante el sufragio directo y/o los mecanismos de representación proporcional. El presupuesto básico subyacente a este modelo de representación política es que la composición del cuerpo parlamentario refleja la disposición política



de la sociedad y, por tanto, manifiesta la voluntad popular. En esta perspectiva, la ciudadanía elige de manera indirecta a sus gobernantes; la decisión final de la distribución de los cargos de la administración pública, es una facultad de las cúpulas partidarias. En lo que respecta a la principal responsabilidad del poder ejecutivo, esto es el cargo de Primer Ministro o de Jefe de Gobierno, por lo general, la asume directamente el personaje con mayor presencia y/o influencia política del partido mayoritario –o del partido que encabeza la coalición partidaria, según sea el caso- en este cuerpo parlamentario. De la misma manera, el programa de gobierno que se aplica corresponde a las proyecciones particulares de las mayorías parlamentarias, donde la sociedad tiene escasas posibilidades de intervenir –como no sea a través de la presión sobre sus representantes locales de circunscripción.

La fortaleza, la efectividad y los alcances del desempeño de gobierno se realizan sobre la negociación permanente con la disposición de las fuerzas políticas que conforman al Parlamento. Este hecho explica que un partido “fuerte” pueda prolongar, de manera indefinida y por un tiempo prolongado, al mismo Jefe de Gobierno –es el caso de Felipe González y José María Aznar, en España-; pero así mismo explicita que ante la existencia de un gobierno políticamente “débil” se proceda al voto de confianza y, en consecuencia, a la renovación electoral del Parlamento –tal fenómeno es ejemplificado con demasiada claridad, por las diversas crisis políticas que han enfrentado los diferentes gobiernos italianos de las últimas tres décadas. De esta forma, la alianza de la clase política con la sociedad civil se agota y circunscribe al espacio específico de los procesos electorales, los cuales, en la cruda realidad de los hechos, sólo sirven para legitimar al partido, o al conjunto de partidos, que ejercerán el poder público. Es evidente que tanto la actuación de los miembros del Parlamento como los responsables de la administración gubernamental –los cuales, a fin de cuentas son elementos de tales emplazamientos del Estado-, se encuentra más determinada por los programas y las plataformas político-ideológicas particulares sustentadas por los partidos de donde provienen, que por las tendencias socio-políticas del sistema social. Tal escisión entre las determinaciones del sistema político y las disposiciones del sistema social, bajo la modalidad parlamentaria de gobierno, se manifiesta, con toda su fría desnudez, en la inamovible decisión del gobierno de Aznar para participar, de manera activa y comprometida, en la internacionalmente cuestionada invasión a Irak –en corresponsabilidad con Estados Unidos e Inglaterra-, pese a la estridente demostración del rechazo mayoritario de la sociedad española.

3. La representación en los sistemas de administración presidencial.

Por su parte, la representación ejecutiva en los regímenes de administración presidencial se legitima al margen y de manera diferenciada a la representación parlamentaria. El jefe de gobierno es elegido mediante el sufragio universal de la sociedad electora –que no necesariamente comprende al complejo social en su conjunto-, bien sea como efecto de la elección directa, o como producto de la decisión final del Colegio, Consejo o Comité Electoral –es el caso de los Estados Unidos-; mientras que los congresistas, ya sean diputados o senadores, son elegidos por circunscripciones políticas locales. En consecuencia, se comprende que por el modo de legitimación electoral, el presidente representa la soberanía del sistema social –de la Nación, en términos modernos-, en tanto que sólo el pleno de los cuerpos parlamentarios –Cámara de Diputados y Cámara de Senadores- puede asumir la representación total de la voluntad ciudadana. De esta suerte, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, un parlamentario puede ser investido, o erigirse, como representante legítimo del país –a menos que sea nombrado jefe de gobierno-. En teoría, un miembro de los cuerpos del parlamento sólo representa y debe rendir cuentas directas a la circunscripción local donde fue elegido. Empero, la intervención de los parlamentarios en tribuna, así como su posición y decisión en las determinaciones políticas del Estado, siempre asume un carácter nacional, esto es, los diputados y senadores son elegidos y representan circunscripciones particulares, pero los argumentos, las resoluciones y las consecuencias de las posiciones de cada parlamentario, en específico, y de las cámaras, en su conjunto, comprenden efectos que involucran y afectan a todo el sistema social. Conviene advertir que la dinámica de los cuerpos parlamentarios se encuentra más acotada por las definiciones de los partidos políticos representados en éstos, que por las disposiciones y/o tendencias socio-políticas, económicas y étnico-culturales del país, o de las circunscripciones políticas de donde proceden. En otras palabras, los denominados representantes populares adecuan sus posiciones parlamentarias a los dictados de los partidos que los postularon y al margen del estado de la voluntad popular que los eligió para representarla. Siguiendo los planteamientos de Norberto Bobbio, la independencia de los representantes políticos con respecto a la voluntad ciudadana –según se explica antes-, se debe al hecho de que se trata de una forma de representación fiduciaria, donde los parlamentarios tienen la facultad para interpretar a su discreción los asuntos públicos y obrar en consecuencia, aún a contracorriente de las disposiciones, coyunturales o fundamentales, de la voluntad ciudadana; sin



embargo, toda vez que la dinámica parlamentaria se encuentra condicionada por las determinaciones de los partidos políticos que conforman al parlamento, es entonces pertinente preguntarse: ¿los partidos políticos representan la voluntad popular?, y en el supuesto caso de una respuesta afirmativa, ¿cómo adquieren los partidos políticos la legítima representación política de la sociedad?, ¿es que acaso con la elección de candidatos, al propio tiempo, se elige a los partidos políticos postulantes?, ¿los procesos de elección de candidatos dotan de representatividad política a los partidos que los postulan?, ¿cómo representan los partidos políticos al sistema social? y finalmente, ¿qué representan los partidos políticos?

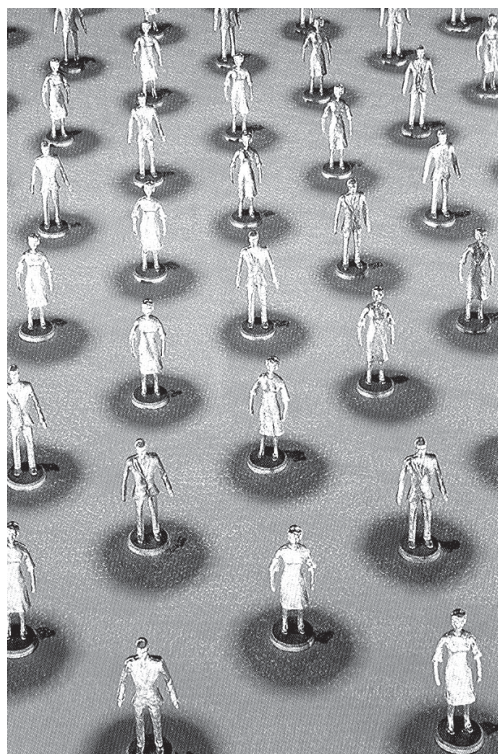


FOTO IMAGE BANK No. 21: PIERRE-YVES GOAVEC

Ahora bien, con respecto al ejecutivo, se presupone que los electores, al sufragar, optan por el programa de gobierno que sustenta el candidato elegido, es decir, siempre en teoría, que a través de los procesos electorales la ciudadanía selecciona tanto al gobernante como al régimen y al programa de gobierno. A diferencia de la condición representativa parlamentaria que siempre tiene un carácter colectivo, la representación ejecutiva, en los modelos presidenciales, es unipersonal y autodeterminante. Unipersonal porque se elige a un candidato para desempeñar las funciones de la administración pública – cuanto más, una fórmula constituida por los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia, de acuerdo con la tradición política estadounidense; con todo, el ejercicio del poder presidencial preserva su carácter unipersonal-, conforme a un programa concreto de gobierno; pero unipersonal, también, porque la responsabilidad y la decisión final de los actos ejecutivos corresponde por completo al jefe de gobierno. Autorreferente porque no se encuentra supeditado, como en el caso de los representantes parlamentarios, a las determinaciones de los partidos que los postulan. Los referentes fundamentales del gobernante en funciones son sus formas particulares de interpretar la

realidad social y los modos específicos de intervenir en ésta, conforme a sus propios intereses políticos. Este hecho resulta por demás patente, en los periodos de mayor algidez electoral. Al parecer, los representantes elegidos para el poder ejecutivo, encuentran un mayor margen de independencia y actuación política, con respecto al partido, o coalición de partidos que los postula; por el contrario a lo que sucede con los representantes al poder parlamentario, los partidos políticos suelen organizar todos los recursos disponibles a su alcance para respaldar los actos de gobierno de los ejecutivos públicos emanados de sus filas. Tal espectro de circunstancias políticas explica los siguientes hechos: la responsabilidad directa del gobernante ante la sociedad, la facultad ejecutiva de definir las políticas públicas conforme a sus disposiciones personales, así como de nombrar a los miembros del gabinete de la administración gubernamental – cuyos miembros sólo son responsables indirectos de sus decisiones frente al complejo social, puesto que en primera instancia deben responder al jefe de gobierno de cuya voluntad depende su nombramiento y permanencia en el puesto administrativo-, además de la representación del Estado tanto en el contexto de la comunidad internacional, como en el concierto del ámbito interno. A riesgo de parecer en exceso rigurosos,

es fácil percatarse de que existe una gran cantidad de individuos en posiciones estratégicas de gobierno y cuyas decisiones afectan de modo determinante los asuntos de interés público, que carecen de cualquier forma de representación política legitimada mediante los procedimientos electorales. En el poder ejecutivo se localizan los miembros de la familia cercana al jefe de gobierno y, desde luego, los elementos del gabinete presidencial; mientras que en el poder del parlamento se ubican los parlamentarios plurinominales. En ninguno de tales casos, cuentan con una legítima representación política de la sociedad, aún así, disponen de los recursos del Es-

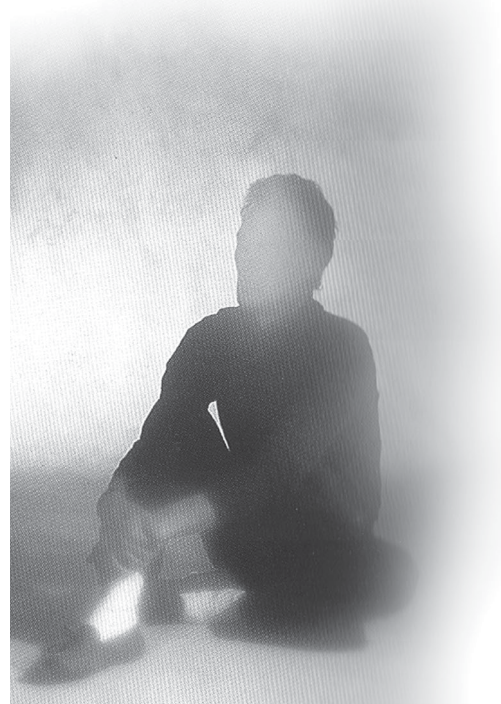


FOTO IMAGE BANK No. 21: STEVE KRONGARD INC.



tado e intervienen de manera significativa en las resoluciones que afectan al conjunto de la sociedad. En realidad, estos agentes representan a grupos particulares del poder socio-económico, o de la burocracia, y a partidos políticos. Su designación siempre responde a cuotas de poder de los bloques político-económicos dominantes, lo cual carece de cualquier vestigio democrático. Los sistemas políticos mixtos, es decir los sistemas que fusionan los modelos parlamentarios y presidenciales –como el sistema político francés, por ejemplo-, conjugan las problemáticas de ambos esquemas de representación política.

4. El análisis:

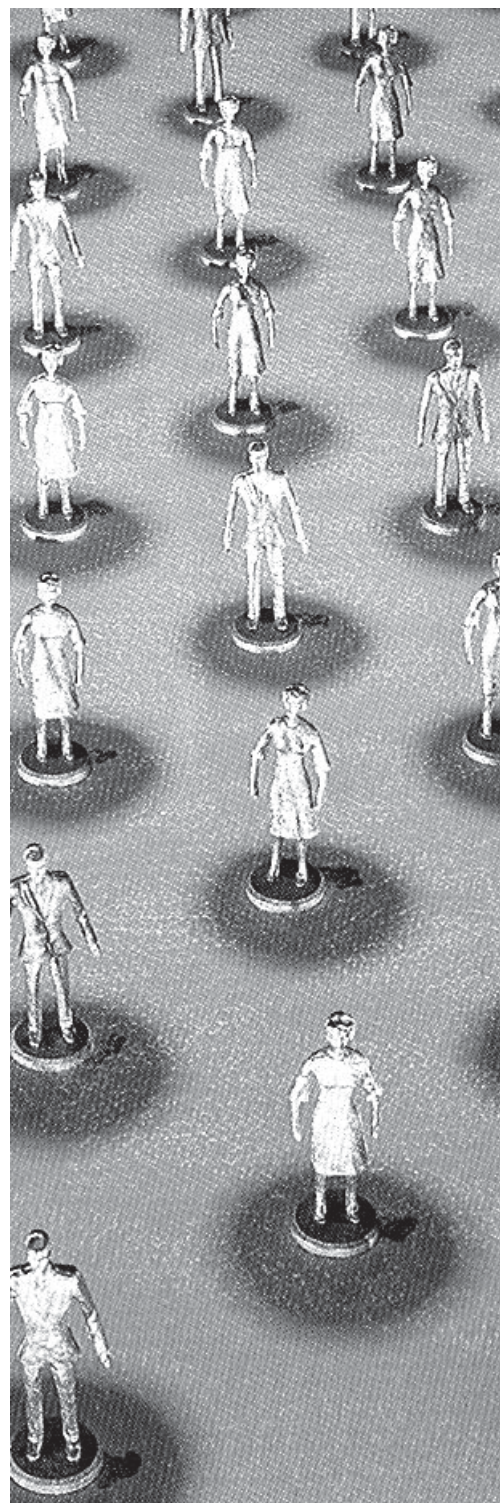
la representación política, atrapada en la crisis de credibilidad.

En la actualidad, ambas formas de representación política –tanto la ejecutiva como la parlamentaria-, enfrentan una patente crisis de representación y credibilidad social. Las fuentes de esta crisis son distintas, a saber: en el ámbito político, la ruptura de la utopía que nos lega un mundo sin alternativas, así como la subordinación del sistema político a las exigencias de la expansión y consolidación planetaria del capitalismo; en el contexto étnico-cultura, el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad social, además de la incapacidad del Estado para responder con eficacia a la multiplicación exponencial de las demandas sociales y del sistema político para diversificar y ampliar los espacios de participación ciudadana; en la dimensión ético-social, la persistente recurrencia de los actos de corrupción política; y en el ámbito socio-civilizatorio, el afianzamiento del individualismo en cuanto fundamento de las sociedades contemporáneas. En los procesos electorales, la ciudadanía carece de auténticas alternativas políticas sobre las cuales optar, puesto que en el fondo no existen diferencias significativas entre los discursos y/o proyectos de los distintos candidatos (la izquierda representa más la nostalgia de un romántico pasado ideal, que un proyecto viable de organización socio-cultural, conforme a las nuevas realidades socio-históricas); por lo cual, sólo encuentra cuatro verdaderas posibilidades de elección: la abstención, el candidato con mayor carisma social, el >>voto útil<< y el >>voto de castigo<<. Los resultados electorales de las últimas décadas del siglo XX y del primer lustro del siglo XXI, en el mundo, demuestran altos niveles de abstencionismo, la elección de grandes demagogos políticos y el cambio de regímenes gubernamentales como producto de >>castigos electorales<< de la ciudadanía. Así pues, ante el abismo que se apertura entre el sistema político y el sistema social, los partidos políticos asumen la función de tutelar

expres

los intereses generales de la sociedad. De esta forma, los representantes políticos del poder ejecutivo y parlamentario tienden a representar las doctrinas ideológicas, los intereses particulares, las disposiciones emergentes y las fuerzas políticas de los partidos, al margen de las verdaderas tendencias de la voluntad social. En el presente, pese al enorme prestigio y expansión de la democracia electoral, se esconde la perversa presencia de una firme dictadura de partidos.

Es claro que quedan pendientes de reflexión varios temas, tales son: la forma en que opera esta dictadura de partidos, el *status quo* de la representación emergente y el problema general de la representación política en las sociedades contemporáneas; pero por cuestiones de espacio, habrá necesidad de esperar una ulterior ocasión. Vale la apertura de las vetas de discusión.





la educación caocívica

Gildardo Durán Sánchez*

“¿Es imaginable un ciudadano que no posea un alma de asesino?”
E.M. Cioran, *Ese maldito yo*.

“Cuando hablo de democracia venidera... pienso en una democracia que no estaría ya ligada de manera esencial a la ciudadanía”
J. Derrida, *y mañana, qué...*

1. La educación es...ética y cívica.

Una de las dimensiones más trascendentes de la vida humana es la educativa. Incluso, podríamos establecer una especie de equivalencia entre la existencia y la enseñanza. La instrucción, por ejemplo, es una práctica desarrollada en y para la vida, y, la vida, por su parte, fluye en forma de proceso educativo. La naturaleza misma del hombre hace posible este enlace necesario, indiviso e interminable. Si concebimos al hombre como un ser inacabado e inacabable en su determinación –el *homo infinitus* que hemos venido desarrollando- (1), con capacidades plurales y potencialidades infinitas en virtud de haber siempre en él un plus de concreción, estamos en condiciones de definirle como un ente educable. Sólo alguien pleno y totalmente realizado, cuya existencia ha conseguido el máximo nivel de perfección, no requiere ya ser retocado por la mano del aprendizaje. Pero siendo el individuo un ente imperfecto, capaz siempre de mayores realizaciones, conlleva el rasgo de la educabilidad permanente e inconclusa. La educabilidad se funda de este modo en su capacidad de refinamiento, en esa disposición innata a cambiar con sentido y conocimiento. La formación educativa, así, es el único medio de ir colmando a la vida de humano contenido, de actualizar en consecuencia sus posibilidades variadas e infinitas.

Aunque cabe precisar que no toda formación es valorada de la misma manera por los seres humanos. Como dice F. Savater, nos la podemos arreglar más o menos sin información matemática o astronómica, pero no podemos prescindir por ejemplo de la educación ética o cívica. Podemos vivir sorteando las dificultades propias del camino sin el conocimiento básico de los números

73

* Licenciado en Filosofía. Ingeniero Civil. Maestro en Filosofía de la Cultura. Profesor Titular en el Centro de Actualización del Magisterio en Michocán (CAMM).



y los astros; sin embargo, la existencia sería imposible sin el saber de lo bueno y de lo malo o de la mejor forma de ordenar la convivencia interpersonal. El respeto, la tolerancia, la solidaridad, el bien común, la autonomía, la cooperación, la comunicación, lo bueno, lo justo, son componentes indispensables que posibilitan la vida individual y colectiva. A falta de ellos, o que por alguna razón tuviésemos que prescindir de alguno de esos soportes, la organización y futuro de la vida serían impracticables. El hombre podrá dejar de ser ingeniero o biólogo y no por ello perder su esencia, cosa que no sucede cuando se enajena su ser ético o cívico. Cuando afirmamos la necesidad de la educación –en especial la educación cívica– se debe a que con ella se asegura la permanencia y desarrollo de la vida humana, de la vida entre humanos.

2. La educación caocívica.

Dentro de la reflexión que pretendemos desplegar sobre la educación cívica –en nuestro caso educación caocívica– partiremos de la naturaleza caótica (2) del *homo infinitus*, enfrentada al proceso de globalización que lleva a cabo la civilización industrial actual. Nuestro planteamiento se referirá a la educación de la crisis, del conflicto, del intersticio entre identidades, en el marco de la cultura de la homogeneidad, del imperio del orden y de la dominación del saber tecno-científico. Es decir, aspiramos a delinear, aunque sea vagamente, una formación para la duda desde la certidumbre, para la innovación sin despegar los pies de la tradición, para la tensión en el marco de la armonía identitaria. Podemos decir que la educación asistemática apetecida tiene como fondo lo azaroso e inestable, aunque su condición de posibilidad sea la organización y la estabilidad; esto es, su patria natural es la indeterminación y crisis con el propósito de definir y armonizar adecuadamente la vida pública. Es justamente una instrucción del no-saber para superar el saber establecido con un nuevo saber, una formación del caos que ponga en crisis la institucionalidad política históricamente dada y la sustituya por un orden más adecuado a las exigencias del momento. Disertando sobre estos tópicos J. Rancière afirma: “La comunidad política son intervalos de subjetivación: intervalos contruidos entre identidades, entre lugares y posiciones. El ser juntos político es un ser-entre: entre identidades, entre mundos...” “Una comunidad política no es la actualización de la esencia común de lo que no es dado como en-común: entre lo visible y lo invisible, lo cercano y lo lejano, lo presente y ausente. Esta puesta en común supone la construcción de vínculos que unen lo dado a lo no dado, lo común a lo privado, lo propio



a lo impropio''. (3)

Por la misma especificidad de la *educación caocívica* no buscamos en este espacio elaborar una especie de Declaración de Derechos y Deberes del Ciudadano Universal. Caminamos en sentido opuesto a los Parlamentos Europeos y Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión Europea que, en Niza, Francia, (diciembre del 2000), proclamaron la "Carta de Niza" con la intencionalidad de perfilar al ciudadano europeo del futuro. (4) A lo largo de sus 54 artículos, el texto de la Carta expresa la decisión de compartir valores comunes a fin de construir un futuro estable, democrático e incluyente para toda la Unión Europea. La Carta procura en todos sus capítulos y artículos reforzar y consolidar una ciudadanía europea en muchos apartados con definidos tintes liberales. Se alude también de manera no muy desarrollada y explícita a una *ciberciudadanía* estableciendo libertades y derechos para los ciudadanos de la era tecnológica. La *educación coacívica*, en cambio, no se propone formar un tipo de ciudadanía amparada en un saber y en un interés dado, no incuba una idea sobre lo que debe ser la ciudadanía y a la cual los sujetos concretos nos toque la misión de cumplirla lo más fielmente posible al paso de la historia. Instruye –si vale el término- para el caos, la contradicción, el vacío, el no-saber, fundamento real y prolífico del saber, del contenido, la certidumbre y la identidad. Es la *educación para la ciudadanía* de la búsqueda constante de lo inestable y desconocido, que renueve la institucionalidad política por horizontes insospechados y siempre descentralizados.

75

En ningún momento pensamos en una propuesta educativa abstraída del espacio socio-político. Tomamos a este espacio más bien como el ámbito que le da vida y sentido a la propuesta. En la actualidad, el proceso de *educación caocívica* se ubica en el marco de la globalización económico-política y nuestro propósito es encontrar los intersticios que ofrezcan caos y posibilidad de transformación política. Para ello, desarrollaremos sólo algunos rasgos propios de la mundialización neoliberal que la caoeducación mire como blancos a caotizar. El procedimiento elegido será describir una expresión distintiva del capitalismo neoliberal, para después oponerle el elemento caótico que,

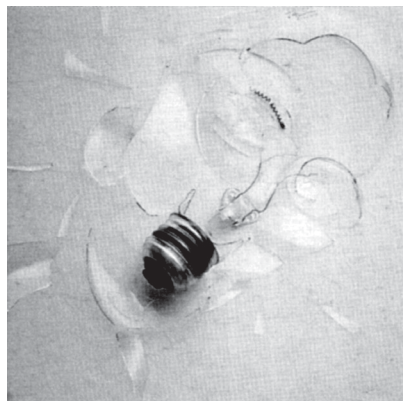


FOTO IMAGE BANK No. 21: HANS NELEMAN

iones

debidamente procesado en la educación, represente una alternativa de realización para el *homo infinitus* que es cada uno de los hombres concretos.

Desde el nacimiento del pensamiento político liberal en la última parte del siglo XVII –con la revolución inglesa de 1688-, y su desarrollo en los siglos que le siguieron con pensadores como Locke, Rousseau, Bentham, postula al “Estado de derecho” como principio fundamental del orden público y garante de las libertades individuales y los derechos civiles. El Estado es ideado por esta corriente como una opción al “estado de naturaleza” de Hobbes y una superación argumentada del autoritarismo de la monarquía absoluta de la Europa preilustrada. En realidad, el Estado ha venido funcionando como elemento organizador de la vida pública y abstracto guardián de la permanencia del orden social y su principio de legalidad. Representa en cierto sentido la estabilidad en las relaciones sociales y la continuidad en el progreso histórico. De alguna manera significa para la ciudadanía lo previsible en el devenir, lo constante dentro del avance cultural, lo armónico en el movimiento sociopolítico y lo permanente en lo impermanente de la vida humana.

La *educación caocívica* en cuanto al Estado moderno -orientador de las relaciones públicas actuales- nos instruye en la incertidumbre metódica sobre la verdad política del mismo. Promueve aquello que desborda bruscamente el orden público y nos instala en el dominio de lo desconocido y no-calculable para la paz social. Se puede denominar *educación ruptural* o proceso formativo dentro de la contradicción que aparece en toda identidad política. Nos capacita para la dislocación institucional que posibilite la transgresión de su proyecto histórico y desemboque en una transformación histórica siempre distinta. Con esta formación el ciudadano se constituye como no-ciudadano al dejar de pertenecer a toda identidad o al identificarse plenamente con la no-identidad política. Una ciudadanía de esta naturaleza va a conformar entidades políticas propensas a la discontinuidad, la ruptura y la tensión local sucesivas. El Estado político pretendido por la *educación caocívica* es paradójicamente un intervalo entre Estados o identidades políticas, lo descubrimos entre momentos y entre lugares dados. Es propiamente un entre, un intervalo expresado como fractura y disociación. La *caoe-ducación* nos induce en cierto modo a un marco de indefinición que preceda y presida la creación de nuevos ordenamientos políticos,



tiene como proyecto privilegiar la *caoticidad* que provoque formaciones políticas inéditas. El individuo aprendería así a explorar la duda, la crisis, las fronteras, a reconocerse en lo inidentificable y crítico, así como a defender en el horizonte de las determinaciones al Estado-Caos.

3. La codemocracia.

Otro de los distintivos de la vida política moderna, es toda aquella práctica que designamos con el término de “democracia”. En un sistema político de esta naturaleza los sujetos están convocados permanentemente a intervenir en los asuntos oficiales. Con ello, están en condiciones de definir la organización política del grupo social al que pertenecen. Tienen el derecho, por ejemplo, a elegir a los gobernantes y a destituirlos o cambiarlos conforme a períodos previamente establecidos en los reglamentos correspondientes. En el discurso, al menos, el ciudadano es la pieza determinante en cuanto a la edificación y orientación del modelo político moderno, es quien toma las decisiones sobre los asuntos que tienen que ver con la vida democrática. En realidad, a donde apunta el concepto y la práctica democrática es a fortalecer la institucionalidad y las leyes que la sustentan, busca ampliar y profundizar los derechos, las obligaciones previamente definidas de los ciudadanos, se plantea discutir y proponer alternativas de solución a los problemas públicos. Además, mucho tiene que ver con la sistematización de las relaciones interhumanas, el mejoramiento ordenado, armónico y coherente del grupo social, en hacer funcionable al Estado y experimentable el proyecto moderno de racionalización –actualmente de tecno-racionalización– de todos los espacios de la vida social tal como lo planteaba Kant.

Parafraseando a Descartes diremos que lo no-calculable, lo no-resoluble y, por tanto, el reino de lo libre “es la cosa mejor repartida en el mundo”. En el discurso político lo no-mensurable suele decirse como lo más democrático e irrealizable en el escenario social. Cuando Derrida quiere referirse a este ámbito acostumbra denominarlo como “lo que viene” aunque nunca de manera plena: “La singu-

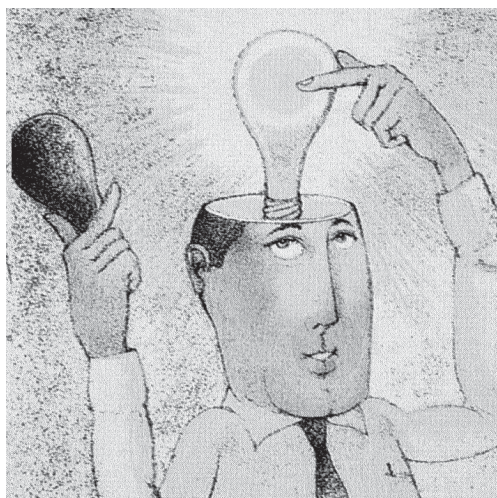


FOTO IMAGE BANK No. 21: GARY KAEMMER

laridad está expuesta a 'lo que viene' como otro y como incalculable. La singularidad en cuanto tal no se reduce jamás... a las reglas de un cálculo mecánico, ni siquiera a las leyes más indiscutibles de un determinismo" (5) La *educación caocívica* entonces no forma ciudadanos para un Estado-nación, encargados de encarnar un proyecto colmado de contenidos y con una meta realizable y preestablecida. La alfabetización de "lo que viene" implica trabajar en la formación de sujetos políticos para la polémica, destinada a propiciar la falla en o entre las identidades, en o entre las culturas, en o entre los saberes oficiales.

Hablamos de una democracia fluida y no rígida que sepa flexibilizar las relaciones interpersonales hasta sistematizarlas. Una democracia del intervalo, del entre, del caos, que haga imposible las identidades imperturbables y posible, en cambio, la experiencia de la no-identidad o de la identidad-porvenir. La naturaleza de una democracia así desfuncionaliza el aparato estatal, pero funcionaliza la quiebra y el intersticio que nos instala en la no-verdad, desde donde descubrir las nuevas propuestas de solución a los conflictos políticos concretos que la mismidad del Estado no puede resolver. En este sentido, la *caodemocracia* no aspira a establecer derechos y obligaciones, ni a definir modelos de ciudadanos propios del Estado, desencadena más bien un proceso de subjetivación política que al desarrollarse en la falla o intervalo es una figura no reconocida. Es algo que se conforma dentro de la singularidad de la fractura identitaria llamada por Rancière "lo otro": ¿Qué es un proceso de subjetivación? Es la formación de un *uno* que no es un *yo* o *uno mismo* sino que es la relación de un *yo* o de *uno mismo* con un otro... La subjetivación política es una puesta en práctica de la igualdad por personas que están juntas y que por tanto están "entre". Es un entrecruzamiento de identidades que conlleva siempre una identificación imposible que no puede ser encarnada por aquellos o aquellas que la declaran. Podríamos entonces actuar como sujetos políticos en el intervalo o la falla entre dos identidades de las cuales no podíamos adoptar ninguna. La lógica de la subjetivación consiste siempre en una identificación imposible... la vida de subjetivación política está hecha del intervalo entre las identidades" (6)

La *praxis* democrática destinada a darle viva realidad al Estado, a actualizar el orden jurídico con el que se organizan y se proyectan las relaciones sociales, no sería factible sin la participación de una cultura que le proporcione identidad y futuro. La identidad cultural es el marco donde se efectúan las interacciones sociales y la que orienta el intercambio personal conforme al conjunto de



valores que sirven de criterios valorativos y de elección. Podemos decir que según sea el modelo cultural con que se cuente será la tradición democrática que se practique y la formación de Estado que se ejerza. Sin alguno de estos tres componentes no sería posible la convivencia social y la organización política. También es cierto que conforme se vuelven más sofisticadas las sociedades modernas, la vinculación entre Estado, práctica democrática e identidad cultural se amplía y se complica de forma progresiva. Foucault, por ejemplo, observa como la función de la cultura moderna es disciplinar socialmente al individuo, sus investigaciones detectan cómo el saber permea las relaciones sociales a fin de uniformarlas y predecirlas. De acuerdo a esta teoría, el propósito disciplinario consiste en asegurar el orden social y que su movimiento histórico coincida con el avance del pensamiento. Es decir, la experiencia socio-histórica de los hombres se ve atada al progreso y, sobre todo, al tipo de progreso racional-cognitivo. Esto significa de manera más precisa que las sociedades de nuestro tiempo se distinguen por prescribir o exigir homogeneidad y armonía en la convivencia diaria, así como continuidad en el devenir. De este modo, la tradición moderna es un modo de subjetivación tal que concibe ciudadanías uniformes y únicas, integradas a estructuras políticas universales y homogeneizadoras.

79

4. La teledemocracia.

Con el proceso de mundialización, de liberación de los mercados, del desarrollo de las nuevas tecnologías, el vínculo y determinación entre el Estado, la vida democrática y el esquema cultural se presenta de manera inédita, sin precedentes en la historia de la comunidad humana. La cultura dominada por la lógica economicista, por ejemplo, tiende a convertir al Estado en un mercado global y las nuevas tecnologías, por su parte, hacen de la democracia una *teledemocracia*. Con la implantación del neoliberalismo la actividad política cada vez se supedita más a los propósitos económicos y en esta orientación colonizadora -como dice Habermas- la noción de ciudadanía participativa, que define la vida pública (política, cultural, social), da paso a la ciudadanía virtual conquistada por la imagen y la lógica del consumo. La identidad forjada y requerida por la civilización industrial entonces sirve para justificar el trabajo productivo y la ganancia económica. La cultura del capitalismo tardío supone la eficiencia, la competencia, la utilidad, el individualismo, y el sujeto se reduce a cumplir dichas exigencias culturales, a fungir como medio de tales fines, subordinándose al mecanismo de estos objetivos instrumentalistas y productivistas.

iones



De dicho modo, el saber tecno-científico, la cibercultura del siglo XXI, se ve a sí misma como una entidad trascendente con signos claros de autorreferencia y autosuficiencia. En su visión no se encuentra atender y resolver los grandes retos de la política social del presente: desempleo, ecología, desarme, etc. En lugar de abordar desde su competencia las necesidades sociales y humanas, su interés primordial es su propio desarrollo, entendido éste como un progreso dentro del orden neoliberal para conservar las jerarquías sociales, los privilegios de las élites financieras y la dependencia de las necesidades humanas a las exigencias de la civilización industrial. Así, la promesa que ofertan las nuevas tecnologías (internet, comunicación digital etc.) es un mundo virtual, perfeccionista, que nos haga olvidar la realidad ambigua y contradictoria, una teledemocracia que dirija nuestras voluntades cívicas y una cibercultura destinada a subordinarse al orden que convenga al mercado liberal.

5. La educación cívica del caos.

80

Podemos afirmar con Platón y Aristóteles que el campo y la función de la economía y la política estaban bien diferenciados, ambos sistemas tenían bien claro el ámbito y el límite de su quehacer social. Podríamos decir que dentro de la necesaria relación había mutua autonomía. Fue con Hegel y, sobre todo, con el pensamiento marxista que la sana distancia entre el trabajo productivo y las decisiones políticas empezó a desaparecer. Con la modernidad la actividad pública fue vista en gran medida como un reflejo de las relaciones de producción y, con el desarrollo económico, los fines utilitaristas fueron imponiéndose cada vez más sobre los proyectos político-sociales. En el período actual de las nuevas tecnologías, la tendencia es resolver los asuntos de la vida cívica desde la perspectiva técnica. De acuerdo a esta teoría, la pobreza, la injusticia, la exclusión, sólo pueden ser superados a partir del desarrollo tecnológico. La naturaleza política -tan esencial en la forma de convivencia que adquirían las sociedades premodernas- se convierte ahora en asunto meramente de decisión y posibilidad técnica. Paralelo al avance de la civilización industrial, crece en los hechos el proyecto de una escuela organizada y operando como empresa, la educación funcionando con fines económicos, se afirma la formación de individuos para el trabajo y su eficiencia. De este modo y bajo la tendencia descrita, se vislumbra el futuro del hombre desplegándose en el paraíso de la razón tecno-científica, viviendo la vida personal en forma virtual o, peor, como máquina humana.



A nuestro juicio, la salida del dominio técnico y racional, homogeneizador y universal, es posible con la realización de la educación cívica del caos. La enseñanza apegada a la caoticidad está obligada a capacitar, en primer lugar, en la detención de las manifestaciones singulares que se dan en la monotonía de la vida pública. La crisis, el conflicto y todo aquello que altere la institucionalidad vigente son definidos como momentos singulares y deberán ser objeto de reflexión y discusión escolar. Dentro de los programas, objetivos, contenidos, etc., de la educación caocívica tendrán prioridad estos casos singulares causados siempre por las “diferencias” existentes en la estructura política. El término “diferencias” que se encuentra en la base de las imprevistas singularidades, alude a los actores políticos excluidos de algún modo de las entidades dadas; en la actualidad serían los trabajadores, los desempleados, las mujeres, los indígenas, etc. La educación de naturaleza caocívica asumirá el compromiso de estudiar y comprender las diferencias desconocidas y rechazadas por la cultura política prevaleciente. Como tema central de la formación de los nuevos sujetos políticos la instrucción abordará las diferencias incompatibles, clandestinas e insospechadas de los

regímenes políticos. Es decir, el valor o materia de trabajo de la caoeducación es tratar las diferencias singulares excluidas de las identidades uniformes, con la finalidad de transformar las relaciones sociales a partir de la participación política de éstos.

Dentro del currículum de la caoeducación es imprescindible plantearse la participación de aquellos sujetos que no están reconocidos en el *status quo*. La razón es básica: el juego político sólo es posible en la medida que los grupos marginados, las “diferencias”, intervengan y modifiquen la tradición cultural que los condena al ostracismo. En la mismidad de la identidad, nada irregular acontece para que sea necesaria la acción política. Sólo cuando aparece la crisis, el desacuerdo, el disenso entre las diferencias y la estructura establecida, la política tiene una función y un quehacer ahí. De un modo esquemático podemos decir que lo propio de la política es la diferencia y no la identidad. Esto significa de manera clara y un tanto resumida que la condición de posibilidad del trabajo específico de la política son aquellos conflictos que no pueden ser arbitrados por la legitimidad dominante. Lo propio de la caoeducación por tanto es capacitar al alumno en el descubrimiento de lo conflictual, y con ello, en la investi-

gación de los no reconocibles por el sistema, así como el no-lugar que ocupan en ella.

Esencial en el quehacer caoeducativo, en la formación que tiene como valor principal el caos, es que el estudiante se ejercite en la construcción de la vida cívica. Puesto que los sujetos excluidos no son visibles a los ojos de la tradición cultural, ni sus razones están debidamente legitimadas; incluso las condiciones que hagan posible el diálogo no están dadas, la preparación escolar caocívica tiene la tarea de trabajar áulicamente estos aspectos. Rancière plantea en este sentido que "lo propio de la política es justamente que la escena no está constituida, el objeto no está reconocido y los propios participantes del debate no están legítimamente como tales. La política comienza cuando se hace aparecer como sujeto de debate algo que no está visto, cuando quien lo enuncia es en sí mismo un locutor no reconocido como tal" (7) Esto supone que el educando y futuro ciudadano se forma para cumplir con el reto de saber tratar el conflicto, de poder ubicarse en el no-lugar que ocupan las *alteridades* no reconocidas, así como de crear el escenario adecuado que haga factible el encuentro y diálogo entre las partes desavenidas. Consideramos de momento que la educación que se proponga específi-

camente el tratamiento del conflicto y de las carencias mencionadas, es un buen principio para el restablecimiento y sanidad de la vida cívica de nuestra comunidad.

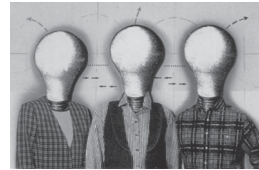


FOTO IMAGE BANK No. 21: RICHARD SCHNEIDER

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1.- Véase Durán, G., 2004, "Educación, filosofía y política en la formación del ciudadano actual", en *expresiones*.
- 2.- Órgano oficial del IEM, No. 3, IEM, Véase Durán, G., 2004, "¿Cómo se construye la ciudadanía?", en *expresiones*. Órgano oficial del IEM, No. 4, IEM, Morelia Mich., pp. 49-63, (en especial véase las páginas 58-62)
- 3.- Rancière, J., 1996, *El desacuerdo*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, págs. 170 y 171
- 4.- Pérez Luño, A.-E., 2004, *¿Ciberciudadaní@ o ciudadaní@.com?*, Gedisa, Barcelona, pp. 109-127.
- 5.- Derrida, J., 2003, *y mañana, qué...*, FCE, Buenos Aires, pág. 61.
- 6.- Rancière, J., "Política, identificación, subjetivación", págs. 30 y 31, en *Metapolítica*, julio/agosto 2004, *Los nuevos sujetos de la política*, No. 36, México, D. F., pp. 26-32.
- 7.- Rancière, J., "La democracia es fundamentalmente la igualdad", pág. 256, en Quiroga, H., et al (compiladores), 2001, *Filosofías de la ciudadanía. Sujeto político y democracia*,



re)semantizar la política¹

Ignacio Hurtado Gómez*

Sumario: A. Primeras reflexiones. B. ¿Por qué (re)semantizar?
C. ¿Por qué (re)semantizar la política? D. A manera de conclusión.

“La constante de los problemas políticos es la naturaleza humana”.
Hermann Heller.

A. Primeras reflexiones.

Sin duda, a partir de los nuevos contextos socio-políticos que respiramos, y de la mano de nuestra transición democrática, nadie podría negar el hecho de que en los últimos años las formas políticas e institucionales simplemente se han modificado; por lo que en ese sentido se considera necesario plantear una serie de consideraciones en torno a la necesidad de (re)semantizar el concepto de la política, como el sustrato fundacional que debe cruzar en todos los sentidos nuestro mapa democrático.

Al momento surgen de inmediato cinco ideas aisladas que, en conjunto vienen a dar rumbo a las presentes líneas: la primera, soportada sobre la base de los imaginarios sociales que se han venido reconstruyendo en torno a nuestro acontecer político; la segunda idea ofrecida por el poeta Pablo Neruda cuando sostiene que “los de entonces, los de ahora ya no somos los mismos”; la tercera, que encuentra su base en la tesis *orteguiana* de que “el hombre es él y sus circunstancias”; otra más, extraída del pensamiento de Octavio Paz, cuando en su *Laberinto de la Soledad* nos habla del sentido de trascendencia del mexicano frente a la vida y la muerte; y finalmente, el hecho de que la reflexión y la crítica constituyen condiciones fundamentales para la reordenación de la vida social y política a partir de nuevas posiciones.

En efecto, producto de nuestra marcha democrática y de la reformulación de los tejidos sociales hemos llegado a puntos donde las percepciones colectivas en torno a la política no resultan del todo favorables, o al menos, no como lo quisiéramos, y que incluso nos han llevado al extremo de que algo tan serio y fundamental se vea parodiada a través de los medios masivos

83

¹ Con especial afecto para con quienes nos empeñamos en construir ciudadanía desde las diferentes trincheras posibles, en particular para el aprendiz de brujo.

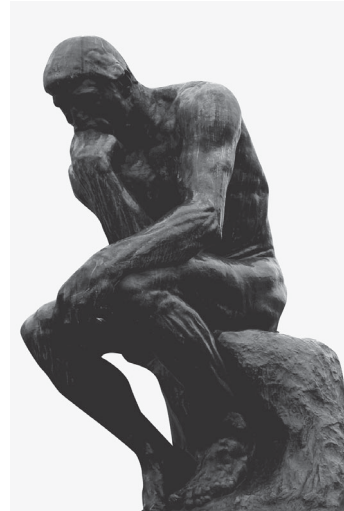
* Licenciado en Derecho. Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH.

de comunicación. La desafección y negación hacia ella se constituyen como una constante que se implica con una variedad de factores que giran en su entorno, entre ellos, el simple hecho de que las propias conciencias colectivas “ya no son las mismas”, y en consecuencia, la necesidad de atenderlas políticamente a partir de “sus propias y nuevas circunstancias”, constituye la base para su (re)semantización.

No obstante ello, un primer paso obligado es el de convencernos de la necesidad de replantearnos la noción básica de la política y su importancia, tanto en la construcción democrática como en la reformulación de una cultura cívica; por lo que será en esa dirección hacia donde orientaremos el esfuerzo, es decir, hacia la sola intención de justificar la propuesta.

B. ¿Por qué (re)semantizar?

La decidida necesidad de “volver a” o de proponer la reflexión sobre bases diferentes a las originales, nos ha llevado en varios espacios a la utilización reiterada del prefijo inseparable “re”. De esta forma en ciertos momentos hemos hablado del (re)pensar nuestras instituciones democráticas y republicanas de cara a las nuevas realidades; igualmente se ha calificado a los tiempos actuales como de (re)configuraciones sociales a la luz de los contextos construidos en los últimos años; asimismo se ha propuesto una (re)ordenación del poder a partir de la nueva conformación política de los órganos públicos; ¿y qué decir de las (re)definiciones en tiempos de indefiniciones? o simplemente del (re)planteamiento de postulados sobre premisas diferentes en tiempo y espacio.



Ciertamente, pareciera que existe un uso indiscriminado del “re”, sin embargo, en todo momento, lo que se ha tratado de destacar como punto cardinal es la invitación a entender que los nuevos análisis y reflexiones deben verificarse a partir del reconocimiento a nuevas circunstancias, y es aquí donde aparece un nuevo concepto: la (re)semantización.



En efecto, la semántica se encarga del sentido de las palabras, y por tanto, se distingue como una labor que pudiese resultar sugerente en la medida de que se ofrece a sí misma como la posibilidad de entender y atender un nuevo significado de las normas, de los comportamientos, de las instituciones y de los símbolos colectivos que, no obstante ser permanentes en el tiempo, igualmente se nos van presentando como diferentes con el paso de la cotidianidad.

Como quedó apuntado, por un lado Pablo Neruda establecía en su prosa poética que “los de entonces, los de ahora ya no somos los mismos”, mientras que Ortega y Gasset nos ha indicado que “el hombre es él y sus circunstancias”. Bajo esta tesitura, Neruda nos recuerda que las dinámicas sociales y políticas se van modificando con el paso de los tiempos, en tanto que Ortega y Gasset nos sugiere atenderlas en función a sus nuevas circunstancias; y así, con estas referencias y de la mano de la (re)semantización, habría que explorar aquellas formas que nos lleven a dotar de nuevo significado a nuestras actuales instituciones democráticas.

Sin lugar a dudas, las normas de convivencia social y política se han modificado para posicionarse de una colectividad pluralista donde la tolerancia en la confrontación de ideas constituye un referente fundamental que reconoce en el valor de la inclusión la *ultima ratio* de la democracia.

85

De igual suerte, la funcionalidad de las instituciones públicas igualmente ha sido trastocada en la medida de las composiciones variadas y diversas de los órganos de poder, de la existencia de los gobiernos compartidos; por lo que se vuelve necesario atender la exigencia de una reordenación que conlleve a la búsqueda y consolidación de nuevos mecanismos institucionales de ejercicio y control que fomenten y garanticen un actuar coordinado y unificado del poder estatal en razón de las necesidades que se le plantean como insalvables.

Por otra parte, en la misma tesitura se nos presenta una democracia que al haber llegado cargada de enormes expectativas y que, al no lograr consolidarse del todo en los nuevos escenarios políticos, requiere de entrada que, por un lado se le entienda como un verdadero sistema de vida –que no se agota en las urnas- a favor de intereses colectivos; y que en el ámbito del ejercicio del poder, entierre la premisa facciosa de que quien tiene la investidura no gobierna, y de quien es oposición lo bloquea.

iones

Finalmente, tenemos un conjunto de valores, comportamientos y percepciones colectivas que requieren ser pensados como nuevas expresiones societales de frente a necesidades y exigencias que se conciben sobre la base de escenarios políticos dinámicos y diferentes, y que a partir de su realización, deberán orientar al fortalecimiento de un capital social fincado esencialmente en la confianza y la solidaridad.

Como se puede ver, la (re)semantización más allá de parecer palabra dominguera, implica lisa y llanamente el sabernos diferentes en el tiempo y en el espacio que nos rodea, y en consecuencia, ajustar con nuevos significados nuestros comportamientos, valores e instituciones colectivas en función a la democracia que en este momento respiramos. Pretender seguir operando nuevas realidades con formas e instrumentos del pasado, -aún y cuando en su momento hubiesen sido eficaces- simple y sencillamente va generando un déficit democrático que tarde o temprano nos puede llevar a una disfuncionalidad social.

C. ¿Por qué (re)semantizar la política?

Con base en lo anterior, la presente interrogante igualmente se podría entender en los siguientes

términos: ¿por qué la *necesidad* de dotar de un nuevo significado a la política dentro de nuestro actual diseño democrático? Sin temor a equivocarnos creemos que uno de los conceptos torales sobre los cuales se finca nuestra organización social es precisamente el de la política, sin embargo, su degradación a partir de las prácticas diarias en todos los ámbitos formales e informales le ha venido restando importancia en el quehacer cotidiano, al grado de que se nos ha hecho más fácil negarla, al tiempo que nos vamos negando a nosotros mismos.



El tránsito de esquemas cerrados hacia modelos más abiertos, pluralistas y democráticos ha motivado el cambio en las formas de hacer y concebir a la política; no obstante, pareciera que desde los



imaginarios sociales poco se ha avanzado, ya que persiste la idea de un sentido negativo en torno a la propia política, y como sostiene Fernando Savater, se insiste en relacionarla con lo turbio, lo oscuro, lo que se realiza debajo de la mesa y a espaldas de la sociedad dejando de lado su sentido noble.

En el caso mexicano, esta realidad ha sido medida con diferentes variantes metodológicas en diversas encuestas como: la *Consulta Infantil y Juvenil del 2000* llevada a cabo por el IFE durante la Jornada Electoral del 2000, la *Encuesta Nacional sobre Ciudadanos y Cultura de la Democracia* en el 2000, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el propio IFE, la investigación *Jóvenes y política: Balance y perspectiva en el 2000*, la *Segunda Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas* levantada por la Secretaría de Gobernación en el 2003; y en el mismo año la investigación *La naturaleza del compromiso cívico: Capital social y cultura política en México* del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Así las cosas, en lo general, todos esos productos estadísticos nos muestran en esencia que existe una inercia desafectiva hacia lo político; una desalineación en torno a las propias estructuras públicas, así como a la creación de identidades ajenas a las propias identidades comunitarias, y lo cual nos va llevando a la conformación de actitudes mucho más pasivas, indiferentes, acríticas, carentes de reflexión y en un ambiente de conformismo silencioso –muchas veces, representado en el fantasma del abstencionismo electoral-, en donde resulta grave la pérdida de un capital social fincado en la solidaridad y la confianza. Amén de la ausencia de referentes colectivos y la tendencia a la individualización que, evidentemente, son aspectos poco favorables en cualquier ambiente democrático.

Una pequeña muestra de lo anterior, y sobre la cual deseamos llamar particularmente la atención por considerarlo como un tema singular, es el de las denominadas *parodias políticas*. En efecto, de un tiempo para acá se nos han presentado en los medios televisivos de comunicación, sendos programas donde la clase política y sus prácticas se nos ofrecen a través de la parodia y de la sátira.

Al inicio invocábamos a Octavio Paz que, en su *Laberinto de la Soledad*, nos hablaba de esa cultura mexicanísima de reírnos de la muerte, de cantarle, de retarla hasta que nos “pele los dientes”, de transformarla en calaveritas de



dulce y hasta de santificarla. Al respecto, señalaba que: “La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. El mexicano no solamente postula la intrascendencia del morir, sino la del vivir”; por lo que entendido así, pareciera que Octavio Paz sostiene que para el mexicano morir no significa nada, porque igualmente vivir tampoco lo significa, es decir, mi intrascendencia es de tal manera que, vivir o morir da lo mismo, incluso, la propia vida *“no vale nada”*.

Más allá de las discusiones que pudiesen propiciar dichas reflexiones, su recuerdo viene a la mente en estos momentos y con referencia a las parodias políticas en cuanto que, podría pensarse que en el momento en que nos burlamos de nuestra realidad política, bien podríamos estar soportando que nuestra indiferencia igualmente postula una intrascendencia de lo político en nuestra vida diaria, y que en cierta manera nos va llevando a afirmar que lo político y los políticos *“no valen nada”*, cuando en esencia todos somos políticos.

Tratemos de explicarnos mejor. Si atendemos al concepto de la palabra *“parodia”* y acudimos a un diccionario podremos observar que se le entiende como una imitación burlesca de una *“cosa seria”*; mientras la *“sátira”* implica poner en ridículo a alguien o a algo.

Ciertamente a favor de esos programas, varios podrían argumentar que las expresiones y ocurrencias que se nos presentan cada semana son un instrumento de diversión y entretenimiento, que sólo ponen al alcance del público y de relieve algo que todos conocemos o inferimos, por lo que no se hace o dice *nada nuevo bajo el sol*. Igualmente, podrán señalar que sus contenidos únicamente representan en gran parte algo de la percepción ciudadana en torno a nuestro contexto político. Incluso se podría sostener que, en última instancia, quienes deben preocuparse deberían de ser los parodiados en cuanto que son exhibidos sus hábitos políticos. Y finalmente, se podría soportar la posición de que esos programas son un reflejo de la apertura democrática que vivimos hoy en día, y en donde las acciones de quienes integran los ámbitos públicos deben estar a la vista de todos.

Hasta cierto punto, con ánimo abierto y tolerante, podríamos comulgar con varias de estas posiciones o argumentos; sin embargo, subsiste una interrogante fundamental: ¿Hasta dónde podemos burlarnos de algo tan serio e importante como lo es nuestra política? Recordemos que gramaticalmente



la parodia significa burlarse de “algo serio”.

De manera generalísima y con o sin *parodias*, la necesidad de revalorar el quehacer político, o de (re)semantizarla a la luz de los escenarios que vivimos, se vuelve como algo insalvable; incluso, nos atrevemos a sostener que esa labor es la *piedra de toque* de un fomento en la cultura cívica y en la construcción de la ciudadanía; ya que antes de motivar las capacidades cívicas de cualquier ciudadano, primeramente se debe reconocer como eso: como un ciudadano, como un ente político; y por tanto, asumirse como un actor fundamental en la edificación de nuestro entramado democrático.

En efecto, creemos que un punto cardinal que debemos empezar por entender es en el sentido de que la política no es exclusiva de un sector o grupo privilegiado, sino que la política es una actividad que se encuentra infiltrada en nuestra vida diaria, ya que en esencia y más allá de eminentes discusiones teóricas, se le debe concebir como el conjunto de instrumentos para llegar a algo, para alcanzar una meta; y así en los ámbitos privados y comerciales se nos habla de las políticas de las empresas, mientras que en los espacios públicos se nos refieren las políticas públicas, las

políticas educativas, las políticas culturales, las políticas económicas. En fin, una serie de instrumentaciones que nos lleven a consolidar nuestra esencia democrática, la cual constitucionalmente se le entiende como el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Por lo anterior, que nos cuesta trabajo entender cuando alguien se afirma desinteresado de la política; cuando se le niega o se le trata indiferente; sin pensar que, por definición, todos somos políticos en la medida de que integramos un grupo social que aspira a mejores condiciones de vida. Tan sólo recordemos simple y llanamente que la palabra política viene de *polis* que fue la *ciudad-estado* de los griegos en la antigüedad; por lo que todo ciudadano griego era político. Y así, permitiéndoseme la analogía, en esta *polis mexicana*, por el sólo hecho de ser sus integrantes -nos guste o no- todos somos políticos; aún y a pesar de quien lo niegue, y porque todos aspiramos a tener una mejor sociedad.

89



iones



En consecuencia, entendamos que la política no es una desgracia del pueblo mexicano que tenga que ser parodiada, exhibida o negada, sino que requiere de la mayor seriedad posible, tal vez la más importante desde siempre, y que por el contrario debe ser debatida, dialogada, reflexionada y hasta reconstruida.

Ciertamente, en este proceso cada quien tendrá que asumir la responsabilidad y compromiso que nos corresponde: a los funcionarios por sus prácticas poco ortodoxas; a las instituciones por la falta de un fomento más activo de valores cívicos; a los partidos políticos por las desalienaciones propiciadas; a los medios de comunicación por la falta de mayores espacios para la reflexión y el análisis; y a nosotros, los ciudadanos, por no asumir papeles más activos y conscientes a partir de nuestra propia esencia política.

La encomienda no parece sencilla y requiere de los mejores esfuerzos, y desde diferentes variantes y perspectivas; pero creemos que vale la pena continuar, pues de lo contrario, ojalá y no terminemos por pensar que la vida, la política y nosotros no valemos nada. Ojalá empecemos por tomarnos y tomárnosla un poco más en serio.

D. A manera de conclusión.

90

Siguiendo a Neruda debemos aceptar que, los de ahora ya no somos los mismos; y en consecuencia, como un producto de nuestro transitar democrático deberemos de reconocer que nuestras formas e instituciones políticas se han modificado sustancialmente en los últimos años.

Congruente con lo anterior, y ya que no somos los de entonces, habrá que emprender el reconocimiento sobre el tipo de política que estamos respirando en estos momentos, por lo que parafraseando la tesis *orteguiana* podremos sostener que actualmente nuestra “política es ella y sus circunstancias”.

Lamentablemente entre negaciones, desafecciones y *parodias*, el escenario político no parece ser el más afortunado por lo que, resulta necesario dotarlo de un nuevo significado que sea acorde a nuestras aspiraciones democráticas, es decir, simple y llanamente (re)semantizar la política, y dotarla del valor real que se merece en todos los espacios de nuestra cotidianidad.

La parte medular de esa labor reconstructiva de la política debe realizarse, sin duda, sobre la base de un reconocimiento individual y colectivo de eso que es inmanente a nuestra naturaleza humana, y que es nuestra calidad social y política, por lo que negar estos ámbitos, implica negarnos a nosotros mismos; por lo que se hace imprescindible tomarnos y tomárnosla en serio.



posibilidades de la sociedad civil y sociedad política para la formación del sujeto ciudadano

Jorge Vázquez Piñón*

1. Tareas formativas de la sociedad civil

La formación del hombre es un problema de la sociedad contemporánea y examinar este problema es constituir pensamiento pedagógico crítico sobre la formación del hombre en una época de crisis y en una sociedad en transición. Examinar este problema en este contexto es una tarea del pensamiento crítico, riguroso y sistemático que asume esas dificultades con los recursos de la reflexión propositiva para configurar ideas y propuestas formativas sobre la base del reconocimiento de la realidad histórico-social que hace posible la consideración de proyectos político-educativos diferentes y alternativos para las políticas educativas vigentes en el momento presente de la sociedad; son políticas educativas que aparecen dominadas por la crisis de la época y descomposición de la sociedad, cruzada y debilitada por las oscuras y poderosas fuerzas negativas de la obsesión por el dinero y el dominio, el egoísmo del interés particular, el exacerbado sensualismo y la fuga de la conciencia social hacia la virtualidad y paraísos ficticios y efímeros mediante la intoxicación de los sistemas nerviosos superiores.

La formación de las nuevas generaciones en la vida social contemporánea es una de las actividades y fines de la sociedad civil; a este ámbito de la realidad histórico-social pertenecen los sistemas institucionales de educación, las políticas educativas, las ideologías sobre de la educación y los valores operativos y eficaces para la formación de las nuevas generaciones. Esta formación aparece determinada por la estructura, movimiento y contradicciones del capital, la función y significado del dinero y mercancía y los intereses particulares de la propiedad privada. Estas determinaciones aparecen dominadas por la crisis y descomposición de la sociedad civil, causadas por la miseria, la delincuencia y la corrupción; lo cual constituye grandes peligros para la soberanía.

91

* Profesor universitario.
Filósofo y Ciudadano.

La tarea del pensamiento sobre la formación del hombre en el ámbito de la sociedad civil va acompañada por la tarea mayor de examinar la reconfiguración de la sociedad civil; esta es la responsabilidad que tienen las ciencias sociales en los principios del siglo XXI: construir teorías, conceptos y sistemas de explicación de las crisis y transiciones susceptibles de convertirse en contenidos y fundamentos de proyectos y acciones políticas.

2. Educación y Sociedad Civil

La condición filosófica de la ciencia de la pedagogía es la posición del pensamiento sobre la educación que hace posible examinar la situación de la educación en la sociedad civil con el propósito de configurar respuestas para las necesidades de formación de las nuevas generaciones en la época de crisis y transición de las sociedades contemporáneas. La reflexión filosófico-pedagógica sobre las responsabilidades formativas de la sociedad civil genera resultados que presenta como líneas amplias de formación específica y que ofrece como alternativas a las necesidades de la crisis y exigencias de las transiciones que muestra la sociedad contemporánea. Estas líneas propositivas se describen a continuación.

92

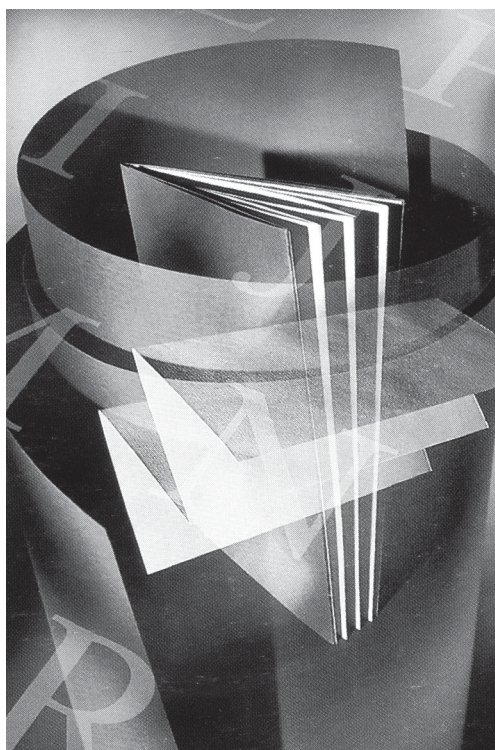


FOTO IMAGE BANK No. 21: ABRAMS / LACAGNINA

a) *Naturaleza y educación.* El maquinismo, la revolución industrial, el desarrollo de la energía para el trabajo y producción industriales, el crecimiento de la población y acumulación de capital resultantes de la explotación de la fuerza de trabajo y recursos naturales son los agentes de la contaminación del medio ambiente y destrucción de los sistemas ecológicos. Los recursos naturales han soportado tres siglos de sobreexplotación continua en todos los aspectos y en bastantes de éstos la tolerancia de la naturaleza ha sido sobrepasada en una desproporción imposible de medir. En el caso del agua y explotación de bosques montañosos y tropicales, los efectos están a la vista: la civi-



lización enfrenta las consecuencias del abuso de la naturaleza y han aparecido fantasmas desconocidos que anticipan la forma de las consecuencias de la acción negativa y funesta del hombre sobre la naturaleza; el cambio global del clima y el daño a la capa de ozono abren el camino para mutaciones o deformaciones imprevisibles en la evolución de la vida. La familia, la sociedad civil y el Estado están llamados a generar proyectos eficaces y acciones efectivas para que la educación y la acción política contribuyan a la reconfiguración de la relación del hombre con la naturaleza, sobre el principio de la claridad racional de la tecnología dirigida a su aprovechamiento y de la claridad racional política que instaure el respeto y conservación de la naturaleza como compromiso de la civilización para reconocerla como el único patrimonio que tiene la humanidad para preservarse y emanciparse a sí misma.

- b) *Lenguaje y educación.* El lenguaje aparece como forma suprema y primordial de la socialidad en general; es la mediación entre la idea y su concepto, el pensamiento y la acción, el proyecto y la instrumentalidad para conquistar los fines de la acción en todos

los órdenes de la vida social. El lenguaje aparece con esas determinaciones, que no son las únicas. Las funciones del lenguaje en la vida humana y social otorgan la alta importancia que tiene en las mismas formas de vida y existencia, como ha sido demostrado por los estudios y resultados de las ciencias de la sociolingüística, etnolingüística y psicolingüística. Así la socialidad del lenguaje aparece en la interacción del hombre con la naturaleza, la sociedad y devenir histórico; es comunicabilidad y expresividad constituyentes y manifestantes de sentidos en la relación del hombre con la naturaleza, la sociedad, el mundo histórico y con la actividad propia de la conciencia. La socialidad del lenguaje es forma y contenido de la civilidad de la educación.

La formación del hombre en la comprensión de las estructuras del lenguaje es condición fundamental para la comunicación con el trabajo, la vida social, el mundo histórico, el pensamiento y el lenguaje mismo. La formación lingüística que propicia la educación contribuye a la constitución de la aptitud del pensamiento clarificador y racional sobre las relaciones del hombre con la naturaleza y sociedad, la historia y la conciencia; es la misma aptitud que impi-



de las deformaciones del pensamiento individual, social y político y los vicios y horrores en la utilización del lenguaje oral y escrito.

La correcta formación lingüística y el uso racional del lenguaje contribuyen a la definición y perfeccionamiento de la percepción visual del mundo, de la captación sensible de los objetos y de la mirada analítica y observación reflexiva sobre los acontecimientos y problemas que constituyen el tejido social en que está entreverada la existencia personal y social de los individuos y clases, de las sociedades y pueblos. El valor y atención que la educación otorga al lenguaje proviene del nivel de estima y respeto que un pueblo otorga al pensamiento y acción racionales generadores de posibilidades transformacionales.

- c) *Valores y educación.* La educación de las nuevas generaciones es la oportunidad que las sociedades se ofrecen a sí mismas para afirmarse a sí mismas y confirmar la validez de los principios y fundamentos de su existencia como sociedades organizadas con estructuras propias y fines conscientes. Educar a las nuevas generaciones mediante los fines propios de la sociedad y principios políticos del Estado es el acto que muestra la síntesis de la formación que la vida social constituye para sí mediante la actividad educativa; este acto es el momento pleno de la educación en valores, mediante los valores y para los valores. Es un acto que tiene tres significados. La aproximación a determinar cada uno de estos significados es el contexto que configura la vida activa y efectiva de los valores; la actividad y efectividad de los valores aparecen como la manifestación de los fundamentos y principios de la sociedad, de las condiciones que la sustentan y de los fines que la impulsan como fuerzas materiales y subjetivas de la conciencia social; esos principios, fines y fundamentos son los valores y por esto mismo, los valores aparecen como formas de vida social, como modos de existencia histórica y política que reciben a las nuevas generaciones y se ofrecen a ellas como las condiciones de su formación. Los valores no tienen existencia ideal o relativa, no se reducen a la moral y no quedan a la disposición de la elección individual. Los valores son formas de vida histórica, fundamento de las acciones que constituyen a la sociedad y de las que promueve la sociedad. Los valores son el ambiente histórico y la atmósfera social que otorgan sustento, fuerza y dirección a las nuevas generaciones que comienzan a constituir la relación con el mundo.

La educación forma las nuevas generaciones en el ambiente que configura la sociedad con relación a los valores que la sustentan y que en ella aparecen



como formas de vida histórica, social y política efectivas; en función de esta relación aparece como insostenible la proclama o promoción de una educación en valores en una sociedad que carezca de los valores en sus fundamentos políticos, principios sociales y fines históricos.

Los valores son formas y contenidos actuantes y eficaces de la civilidad, de la vida social orientada por el derecho y las leyes derivadas de los principios públicos de la sociedad y en la vida social presidida por esta determinación. Los contenidos y metas de la educación cumplen la misión de preservar y potenciar esa civilidad. El contenido de la educación para los valores, en los valores y mediante los valores adquiere de esta manera el significado de la civilidad de la educación y que despliega las siguientes manifestaciones:

- La educación en valores, como expresión de la meta suprema de formar a las nuevas generaciones en los contenidos y asimilación de los principios, fundamentos y fines de la sociedad referentes al trabajo, la conciencia y configuración del devenir de la vida histórica de la nación y sociedad propias;
- La educación para los valores, como relación de las nuevas generaciones con la vida social y mundo histórico que representan los intereses supremos y compromisos públicos de la población para preservar la libertad construida, y potenciar las aptitudes de sí misma para la vida libre, honesta, responsable, justa y respetuosa mediante la formación de las nuevas generaciones en esas determinaciones de los valores;
- La política educativa aparece como la conexión de los valores con la actividad educativa; la eficacia de la política educativa es la misma que caracteriza a la acción política en general: fortalecer la vida social como interés público y potenciar a la educación como formación para la libertad, la que significa: responsabilidad con el mundo y constitución de formas de vida propias, determinar fines históricos propios; luchar por el precio justo para el trabajo y reparto equitativo de la riqueza y asumir la preservación y defensa de la soberanía como sociedad libre y racional.

d) *Moral y educación.* La moral es el comportamiento constituido por acciones que tienen como contenido y fines los principios y fundamentos de la



sociedad y que significan la constitución de una vida libre y para la libertad mediante el cumplimiento del deber y responsabilidad. Los valores constituyen el contenido y fines de las acciones morales que realizan fines conscientes y racionales para la vida del individuo y sociedad, del gobierno y la nación. La moral consciente y racional –que conoce su origen, fines y medios- como tarea para la formación de las nuevas generaciones contribuye a formar el pensamiento crítico y responsable frente a las exigencias y responsabilidades que el mundo y la vida presentan al hombre como persona en la familia, como individuo en la sociedad civil y como ciudadano en la sociedad política.

La moral consciente y racional es la condición de fortaleza y reflexión para el hombre como individuo y persona que enfrenta las exigencias de la instintividad y que debe responder a la realización de las fuerzas biológicas de la especie en el ámbito de la civilización.

En la segunda mitad del siglo XX el examen de las implicaciones políticas y sociales del psicoanálisis indujo a Wilhelm Reich hacia la investigación de las formas para la liberación de las pulsiones sexuales reprimidas por la sociedad; concluyó que la liberación sexual es condición para la liberación política y que la liberación política es condición para la liberación sexual. La década de 1960 marcó el inicio de la época de la liberación sexual, emancipación de la mujer, de tolerancia social para las relaciones sexuales entre géneros iguales, legislación sobre el aborto y prácticas anticonceptivas; las poderosas barreras de la tradición contra la permisividad sexual han sucumbido y el contexto de la relación sexualidad-represión sexual ha cambiado. Resulta difícil y temerario suponer que los cambios en este contexto estén resueltos y sintetizados en una mayor felicidad del hombre en la mediación de la sexualidad; de igual manera resulta temerario y difícil suponer que las sociedades contemporáneas han alcanzado la liberación política en la proporción que permite inferir la manifestación y modalidades propias de la liberación sexual. Por el contrario, no resulta tan difícil o temerario suponer que los efectos de la liberación sexual y flexibilidad social y política frente a la misma liberación constituyen nuevos mecanismos refinados y racionalizados para la represión de la sexualidad en cuanto que el placer es manipulado como recurso instrumental para reprimir la sexualidad mediante el sensualismo egoísta, el consumismo y la comercialización del video sexual que despojan el significado de la sexualidad como una finalidad humana en sí misma para la emancipación

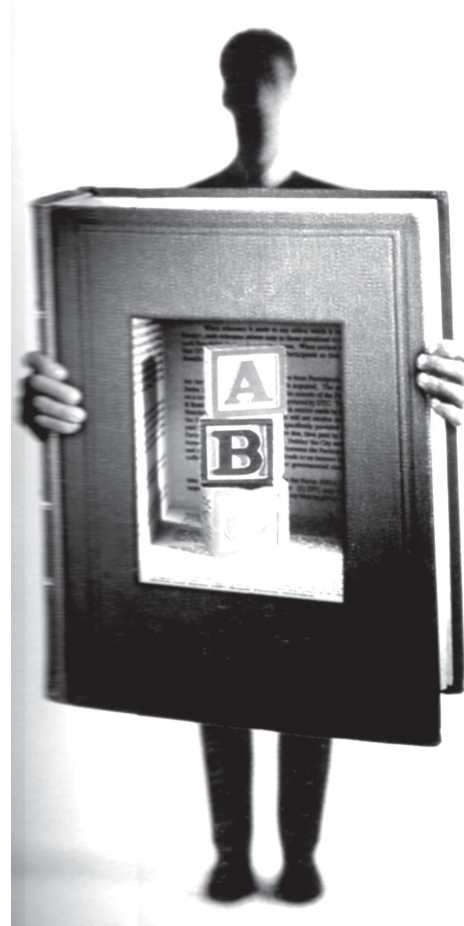


de la especie, la persona y el individuo. La liberación sexual como mecanismo para la represión de la sexualidad es la tesis de Marcuse en sus importantes libros *El hombre unidimensional*, *Eros y civilización* y *La sociedad opresora*.

La educación moral consciente y racional es la condición y acción para comprender la consistencia de las pulsiones sexuales y construir la voluntad para no sucumbir a la naturalidad de las mismas pulsiones tan pronto como aparecen en la adolescencia y juventud temprana. La educación moral es la condición para reconocer el significado humano de las fuerzas instintivas; este reconocimiento es el acto de comprensión de la biogenicidad como condición del respeto, gratificación y reciprocidad que presiden a la intimidad humana de manera moral. El reconocimiento y comprensión de este significado instauran la claridad racional que establece los vínculos constituyentes de la conciencia moral con la moral sexual y que es la moral que emancipa a la sexualidad de la determinación de la instintividad y sensualismo avasalladores y esclavizantes para configurarla como conexión con las formas de los sentimientos superiores y

conscientes y con los afectos como fuerzas subjetivas que arraigan al hombre en la realidad y que constituyen elementos potenciadores y fortalecedores de la relación del hombre con el mundo.

La educación moral del individuo es la formación consciente para reconocer los nexos con la comunidad como formación política y social inmediatas que constituyen la condición de la socialidad cir-



97

FOTO IMAGE BANK No. 21: ABRAMS / LACAGNINA

iones



cunstancial y situacional de la interacción del individuo con la ley y el Estado, el gobierno y acciones para la satisfacción de las necesidades sociales como educación y salud, información y comunicación. La educación moral es la formación fundamental que la sociedad civil constituye en los individuos a través de los sistemas institucionales de educación para el conocimiento del derecho y examen de las atribuciones y responsabilidades del poder judicial.

El conocimiento de las funciones y atribuciones del poder judicial y del derecho son las aportaciones de la educación moral a la formación ciudadana del individuo; este conocimiento es la condición subjetiva para que las nuevas generaciones asuman el respeto a la ley, la comprensión de los valores de la justicia y dignidad como criterios y fortaleza frente a la corrupción administrativa, judicial y gubernamental que surgen como inmoralidades públicas que lesionan los intereses públicos y colectivos de la sociedad y vida nacional. La denuncia de la corrupción y la resistencia frente a las prácticas corruptas de la administración de los recursos financieros públicos, del poder judicial y de la organización burocrática, es la potencia de la formación moral activa y efectiva que la sociedad civil constituye en las nuevas generaciones como respuestas a las exigencias de la población para reconfigurar la moral pública y la vida social saludable de la comunidad, sociedad y nación.

98

- e) *Trabajo y educación.* La formación de las nuevas generaciones para el trabajo es la condición para la valoración de los fines propios y específicos del trabajo físico e intelectual. Es un interés de la vida popular que la sociedad civil y las políticas educativas del Estado conserven la formación de la conciencia de la unidad del trabajo y en el encuentro de sus resultados en la unidad o producción de la vida social y mundo histórico.

El respeto del trabajador manual hacia el trabajador intelectual es reciprocidad del segundo hacia el primero. El individuo verdaderamente sabio sabe y puede trabajar la tierra, cultivar un bosque o un jardín; es capaz de resolver una necesidad material con el esfuerzo de sus manos y brazos bajo la *guiatura* de la inteligencia como pensamiento práctico. El trabajador manual productivo y sabio reconoce el esfuerzo físico y el resultado de la actividad productiva como aportaciones de un individuo y una clase a la constitución del mundo objetivo que es posible por el esfuerzo del trabajo productivo; el trabajador manual sabio aparece en este concepto



porque sabe que el producto de su acción está impregnado de una sensibilidad y de un pensamiento propios que, plasmados en el objeto, contribuyen a imprimir al mundo el signo del trabajo físico matizado por la sensibilidad del esfuerzo y con el pensamiento contradictorio de la gratificación enlazada con la enajenación del producto del trabajo. Esta identidad alienatoria también es una determinación de la libertad como agente de la relación del hombre con el mundo.

3. Sociedad política y pensamiento ciudadano.

La sociedad política es el ámbito de la acción ciudadana; es “la organización referida a la forma universal de un régimen, a su ubicación en el devenir histórico y a su forma de vida... [es] la acción orientada al mundo, esto es, a las condiciones generales de una sociedad, a sus bases, a la conciencia y la <<mentalidad>> que gravita sobre ella, a la organización y contenido de la actividad que le corresponde, es pública por definición (...) es relación con lo universal del continuo social e histórico. (...) La <<competencia>> política (...) gira (...) sobre proyectos históricos; (...) la política no es excluyente o destructiva, sino constructiva e incorporativa, puesto que en el espacio público todos han de intervenir. De este modo, <<lo gobernable>> queda situado en el espacio accesible a todos.” (Iglesias, S., *La sociedad civil y su devenir*, Ed. IMCED, 1995, pp 225-230); “El plano social político (...) se refiere a las formas de organización y los fines de la sociedad desde el ángulo de la praxis constitutiva. (...) la socialidad política toma el carácter de la acción constitutiva, pues se levanta sobre el acto constituyente de un pueblo como sociedad organizada. (...), la acción constitutiva del pueblo mexicano sobre sí mismo tiene como contexto general el principio político de la soberanía nacional, que ensambla las relaciones generales de organización autodeterminada con un Estado y gobierno, con su organización social, economía, educación, territorio, cultura y defensa sobre el principio de la soberanía del pueblo. La política (...) es (...) una condición del mundo social. (...) La dimensión política se levanta principalmente en la decisión libre de vivir colectivamente, de pertenecer a un pueblo y a una nación, para potenciar la vida a cambio de renunciar a los privilegios y prebendas. En ella se funda la igualdad ciudadana (...), tal igualdad, no formal, ha de ser generada en la acción, en la organización, la educación política y en el modo de ser público de ésta. (...), la conciencia política se levanta sobre lo que es *racional*, lo que tiene validez independientemente de la visión personal o de las motivaciones inmediatas de los segmentos sociales, es decir a la *razón política* le corresponde la



organización voluntaria ciudadana, de igualdad, de iniciativa y participación, las relaciones fundadas sobre la decisión histórica del pueblo, las fuerzas y formas de organización social constituidas por él. Todo esto se concretiza en los principios y las normas que son convicción y modo de vida de un pueblo en particular. La relación política es *vida mediada por los demás*, no atomizada ni sometida a la dependencia forzada, orientada hacia lo colectivo, lo público (...) se funda sobre el sujeto *ciudadano y la acción pública*; tiene como contenido a la constitución de la organización social general y como fin el perfeccionamiento de sus diferentes formaciones, para potenciar la vida del ser humano.”(Iglesias, S., *Construcción del objeto sociológico*, Ed. IMCED, 1998, pp. 21-25)

Las tareas formativas de la sociedad política son diferentes a las de la familia y sociedad civil; la condición de esa diferencia está depositada en el sujeto ciudadano y en la acción pública organizada y propositiva que representan la efectividad del pensamiento sobre el problema de la educación; por esto la formación del hombre como problema de la sociedad contemporánea es un problema que corresponde al pensamiento ciudadano y a la acción pública ciudadana potenciadora y vitalizante del Estado.

100

Acción y pensamiento ciudadanos constituyen la autoconciencia reflexiva, propositiva y proyectiva de la sociedad; esta autoconciencia es el pensamiento individual, grupal o colectivo que observa el devenir de la sociedad y las propuestas y decisiones del gobierno; también es el pensamiento histórico y crítico sobre la configuración y fines del régimen político y del Estado que impulsan y configuran sujetos particulares, asociaciones y organizaciones que asumen el examen político de la vida social como compromiso fundamental con la familia, la sociedad civil, el gobierno y el Estado. El examen de la formación de las nuevas generaciones y la crítica y propuesta de contenidos educativos forma parte del compromiso ciudadano con el examen político del problema de la formación del hombre en la sociedad contemporánea.

El pensamiento ciudadano es la fortaleza de la sociedad para reconfigurar la educación, someterla a crítica, valorar sus posibilidades y limitaciones y proponer un nuevo sentido para la formación del hombre; sus conceptualizaciones aparecen como contribuciones para la crítica de la educación y aportaciones ciudadanas para la reconstitución de la educación que forma parte fundamental de los esfuerzos para configurar la formación del hombre en la sociedad contemporánea.



- a) *Filosofía y educación.* El estudio de la filosofía es la experiencia constituyente del pensamiento reflexivo que abre el camino hacia la autoconciencia individual, social y pública; es la experiencia que contribuye a la formación de la autoconciencia histórica, social y política; es la autoconciencia que aproxima a los individuos, grupos y clases hacia el conocimiento de la vida histórica, formas de vida social y fines políticos de un pueblo.
- a) El valor formativo de la filosofía es insustituible y no tiene equivalente, sólo el estudio del pensamiento y reflexión es experiencia constituyente de pensamiento libre y reflexión sobre la verdad. La sociedad establece la posibilidad generadora de su propia potencia emancipadora y fortalecedora de sí misma en la medida y proporción en que el Estado y el gobierno impulsan políticas educativas para la formación filosófica de las nuevas generaciones en el respeto al pensamiento que examina la relación del hombre con el mundo y a la reflexión sobre el devenir de la conciencia, la acción y la realidad histórico-social. Los avances de la teoría de diseño curricular y metodología para la enseñanza-aprendizaje aparecen como el recurso psicopedagógico para

promover el acercamiento de los niños a la trayectoria, importancia y pensadores representativos de la historia de la filosofía; sobre este antecedente la educación media o secundaria puede ofrecer el estudio sistemático de la historia de la filosofía en sus periodos y de las ideas de los grandes pensadores correspondientes a las épocas principales de la filosofía; estos antecedentes son la base para la iniciación de los adolescentes en el estudio de la axiología y ética, estética y filosofía política. El estudio amplio de la historia de la filosofía y disciplinas filosóficas en la educación media superior o bachillerato aparecen como la culminación de la formación filosófica básica de las nuevas generaciones y que queda depositada en ellas como experiencia constituyente de su acción y pensamiento ciudadanos. Esta misma formación básica constituye el conjunto de principios indestructibles para el estudio de la filosofía de las profesiones y de las técnicas en las universidades y escuelas tecnológicas superiores. Esta es la mejor formación para constituir la autoconciencia de los pueblos y de las nuevas generaciones en sus relaciones con la naturaleza y la sociedad, el trabajo y la vida histórica, la orientación política de la vida social y para la conexión



de la existencia individual con los contenidos del mundo histórico: las formaciones colectivas de la realidad social, las formaciones colectivas de la conciencia social y las formaciones colectivas de la acción social. El contenido de estas formaciones es el siguiente:

- Contenido de las formaciones colectivas de la realidad social: instituciones, fuerzas económicas y estructuras de la sociedad;
- Contenido de las formaciones colectivas de la conciencia social: ciencias, ideologías, religiones, valores y principios políticos;
- Contenido de las formaciones colectivas de la acción social: procedimientos técnicos de la producción, el derecho, formas y recursos de la acción política, la organización del trabajo y la defensa militar (Iglesias, S., *El México Nuevo*, Ed. La Mueca, 1999, p. 31).

b) *Conciencia ciudadana, acción política y educación.* La reflexión sobre las tareas formativas de la sociedad política se aproxima a su término; el límite de la reflexión aparece en la voluntad que instaura y en los valores que la mueven hacia la acción; de esta manera aparecen determinadas las tareas formativas supremas de la sociedad política; esas tareas pueden considerarse como terminadas en los momentos en que se manifiesta la conciencia ciudadana como fundamento y correlación de la acción política de los individuos como hombres libres, como hombres responsables con la familia, la sociedad civil, los intereses públicos de la sociedad y la vida soberana de la nación republicana.

La resolución y síntesis de las tareas formativas de la sociedad política aparecen como las actividades generadoras y fortalecedoras de sí misma a través del reconocimiento de la vida popular como fundamento del mundo histórico, de la soberanía como fundamento y fin de la vida del pueblo, y de las responsabilidades públicas y privadas de las nuevas generaciones para con la familia, la sociedad civil y los intereses y principios públicos de la nación.

Las tareas formativas de la conciencia ciudadana y acción política de los hombres en favor de la familia, la sociedad civil y la vida del pueblo y la nación culminan, precisamente, con la formación de la conciencia ciudadana de las nuevas generaciones responsables de continuar la orientación, preservación y fortalecimiento de la soberanía, libertad de la vida popular y autoconciencia de la sociedad y gobierno. El cumplimiento de estas responsabilidades, propias de cada nueva generación, tiene



fundamento, mediación y efectividad en la acción política de la misma nueva generación.

La globalización de la economía, la red de las corporaciones transnacionales, las reformas debilitadoras del Estado y la fuerza que aplican los centros financieros internacionales para inducir o imponer la negociación de la soberanía aparecen como la reforma del capital que impone su poder, instrumentos y fines sobre las naciones y los pueblos; ninguna sociedad escapa a la incidencia de las características y repercusiones de la configuración del capital que ha hecho aparecer un nuevo horizonte para el mundo histórico que se muestra como la formación de una nueva edad media, con la reinstalación de las formas de servidumbre para los trabajadores, control del pensamiento, y centralización del poder en las organizaciones para la regulación del capital, la riqueza, el consumo, la información y la comunicación en el planeta entero.

La organización de los partidos políticos, los sindicatos y la estructura del Estado son relaciones históricas y sociales que por sí mismas no pueden enfrentar y superar las tendencias medievales que el capital impone a la civilización tecnológica, a las sociedades post-industriales, a las sociedades en desarrollo y a las atrasadas, que nunca saldrán de la marginación. Los sistemas políticos y regímenes gubernamentales en diferentes partes del mundo han sucumbido ante las nuevas tendencias. La posibilidad de la preservación y fortalecimiento de la soberanía y libertad de la vida del pueblo está depositada en la formación de la conciencia ciudadana y su acción política refrescante y fortalecedora del Estado, partidos políticos y régimen de gobierno. La acción política de los pueblos es la alternativa de los hombres para impedir la extensión y efectos del horizonte medieval que ha aparecido en el devenir. Así, la acción política y la formación de la conciencia ciudadana enfrentan la exigencia de la misma sociedad política para fortalecerse y extenderse para la preservación de la nacionalidad y la soberanía del Estado libre y popular provenientes de la voluntad de vida libre del pueblo. Esta exigencia que la sociedad política tiene frente a sí y proveniente de sí, es el recurso para la reconfiguración del mundo histórico y de la civilización; es el recurso de la voluntad popular que asume sus valores, principios y fundamentos propios de la vida, conciencia y libertad del pueblo; es el recurso que significa el riesgo propio de la acción política que contiene los peligros y amenazas que surgen en los momentos específicos en que se activan las fuerzas históricas y políticas de la sociedad en búsqueda de la efectividad de sus intereses y principios, esto es la vida



histórica que se levanta frente a las tendencias regresivas o desconstitutivas de las formaciones sociales y políticas de los pueblos.

El presente y futuro inmediato de las naciones soberanas, estados libres y vida popular, tienen como contenido fundamental la tarea formativa del pensamiento político de la conciencia ciudadana para la formación libre y racional del mundo frente al vasallaje y servidumbre que proyecta el surgimiento de una nueva edad media. Lo cual implica asumir, de manera libre, los riesgos de esta acción política gubernamental y popular; me refiero a los riesgos de la organización política y vida histórica popular por la libertad como forma propia de pensar, producir la riqueza, constituir el mundo y transformar la formación social y política de la sociedad para fortalecer y extender la misma libertad que significan el pensamiento político, la conciencia ciudadana y la acción política libre, racional y consciente.